

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas
CAUSA ROL : C-772-2022
CARATULADO : PARRA/FISCO DE CHILE - CDE

Punta Arenas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que, en el folio 1, Juan José Claudio Arcos Srdanovic, abogado, domiciliado en calle Señoret número 230 de la ciudad de Punta Arenas, en representación de doña Nadia Isabel Parra Millatureo, chilena, soltera, auxiliar de servicios, domiciliada en calle Capitán Ramón Serrano número 583, Barrio sur, de la ciudad de Punta Arenas; de Rosalba Marina Parra Millatureo, chilena, soltera, auxiliar de servicios, domiciliada en calle Teniente Serrano número 01457, Población Almirantazgo, de la ciudad de Punta Arenas; y de doña Sandra Angélica Parra Millatureo, chilena, soltera, auxiliar de servicios, domiciliada en pasaje Los Petreles número 01433, Población Aves Australes, de la ciudad de Punta Arenas; interpone demanda en juicio de hacienda, por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, representado legalmente por el Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Magallanes, don Claudio Patricio Benavides Castillo, domiciliado en la calle 21 de Mayo N°1678, de la ciudad de Punta Arenas, o quien legalmente lo subrogue, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho que a continuación se exponen:

I. LOS HECHOS:

Señala que el siglo XX no sólo lo recordamos por los grandes avances, sino también por grandes atrocidades que han de afectar a la humanidad, como las guerras y masacres cometidas entre Estados y respecto de este último frente a particulares.

Es así como se generaron muertes planificadas y justificadas por ideologías diversas, e inclusive por sospecha de ideologías. Sin embargo, no todo ocurrió en un solo lugar. Es de público conocimiento que en Chile hubo dictadura militar desde el año 1973 hasta 1990, abarcando todo el territorio nacional.

Agrega que los Derechos Fundamentales (DD.HH) fueron violados sistemáticamente, dicha dictadura militar, lo que comprendió actos como torturas, ejecuciones, secuestros, confinamiento, campos de concentración entre otros. Algunos compatriotas lograron escapar, otros resultaron exiliados, pero no todos tuvieron dicha suerte. Es por eso, que se han registrado evidencias en los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura y la Comisión de la Verdad Y Reconciliación, que evidencian la implementación de esta política del Estado de Chile, en todo el país. Y Magallanes, no es una excepción, quedando en su memoria, y en dichos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

informes las atrocidades cometidas por parte de funcionarios del Estado en contra de sus ciudadanos.

Indica que la comisión mencionada, logró recopilar información de cada preso político, realizando diversas consultas, interrogaciones a cada uno de los familiares, por lo que con el artículo 4 letra c del Decreto Supremo N°355, se facultó a la misma a que practicase toda diligencia e indagación para determinar la verdad. Dicho informe no debía realizar omisión alguna de los daños, por lo que se utilizó todo medio nacional e internacional existente para recopilar información necesaria.

Destaca que respecto a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país se mantienen pactos de silencio por personal de las FF.AA. Lo que impide obtener el total de la información de lo ocurrido en el periodo.

RELATO

Expone que sus mandantes son oriundas de Puerto Natales, en el caso de Rosalba aunque sus padres las trasladaron desde temprana edad a Punta Arenas, estableciendo en esta ciudad su residencia donde nacieron sus hermanas Sandra y Nadia.

Dice que sus representadas eran jóvenes mujeres que deseaban que Chile volviera rápidamente a la democracia, así pues, como opositoras a la Dictadura Militar se manifestaban pacíficamente en la vía pública pidiendo la realización de elecciones libres y democráticas. Así es que pese a su juventud, siempre sintieron que las perseguían por sus convicciones políticas.

Expresa que durante la década de 1980 hubo una serie de protestas en Magallanes a las que sus representadas se sumaron, así fue que surgió una convocatoria a protesta para el día 27 de marzo de 1984. En esas circunstancias la demandante Rosalba Marina Parra Millatureo, trabajaba de niñera en el sector de Calle Chiloé con Sarmiento y al salir del trabajo se unió a sus dos hermanas, alumnas del Liceo Técnico María Behety, que a esa hora protestaban pacíficamente contra la dictadura en el sector de Avenida Colón con Chiloé. Así pues, las demandantes estaban protestando pacíficamente cuando llegó un piquete de Carabineros que las detuvo a palos. Para ellas la detención fue impactante ya que a Rosalba la comenzaron a golpear con palos y bastonazos. Allí las actoras fueron subidas a un bus donde había Carabineros de Fuerzas Especiales, se les hizo pasar a la parte trasera del bus donde recibieron bastonazos en la espalda, las piernas y la cabeza y una serie de amenazas señalándole que eso les pasaba por ser unas “Comunistas de Mierda”.

Señala que luego de eso el bus se dirigió hacia la Primera Comisaría de Magallanes que en ese entonces estaba ubicada en calle Waldo Seguel entre Chiloé y Carlos Borjes, tras aquello las llevaron a los calabazos policiales de la Primera Comisaría siendo trasladadas a una sala donde habían varios detenidos entre los que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

estaba Clemente Galvez quien estaba tirado en el piso totalmente ensangrentado y sin ninguna clase de ayuda médica.

Agrega que al llegar las actoras fueron recibidas en la Comisaría por un pasillo en el cual a los hombres los golpeaban y a las mujeres les tiraban agua. En lugar les pusieron un saco en la cabeza y las golpearon y Rosalba y a otras mujeres las manosearon. Al ser manoseada Rosalba cayó al piso y se rompió la ceja allí las mantuvieron unas dos horas con el saco en la cabeza sin poder moverse. Por su Parte a Sandra la Golpearon en las rodillas con una vara o luma lo que no pudo apreciar ya que tenía un saco en la cabeza.

Describe que al pedirle el baño les decían “meate comunista de mierda” y a Rosalba le dijo “ten cuidado porque vas a morir como una perra”.

Al final estando en los calabozos las actoras orinaron en las celdas que se encontraban junto a los hombres. El olor era insoportable producto que todos orinaban en los calabozos, perdiéndose la dignidad y la privacidad ya que orinaban en presencia de los hombres que estaban detenidos junto a ellas lo que afectaba su dignidad y era una abierta violación al derecho de las menores de edad.

Indica que en cada calabozo había unos 45 detenidos, donde estaban todos los detenidos hacinados incluyendo al señor Clemente Galvez quien no podía respirar bien y escupía sangre, por lo cual ante la insistencia del señor Bórquez Koren y del señor Sánchez Trecaquista fue derivado a un centro asistencial.

Relata que mientras las actoras estaban en los calabozos les lanzaban agua con manguera de improviso. El espacio del calabozo no permitía sentarse así que tuvieron que pasar toda la noche de pie sobre el agua y la orina.

Menciona que el día 28 de marzo de 1984, sus mandantes fueron conducidas a la Ex Cárcel Pública de la ciudad a eso de las 20:00 horas, también ubicada en calle Waldo Seguel, en un estado de gran hacinamiento; allí estuvieron junto a presas rematadas y sujetas a prisión preventiva, presas que hicieron insinuaciones a la hermana mayor que debía cuidar a sus hermanas dentro de la cárcel especialmente porque eran menores de edad. Así fue que la primera noche comenzaron de nuevo a hacer bromas, pero no pasó a mayores. Así las actoras debieron hacer de “Perkin”, es decir, lavaban la ropa, cocinaban y hacían el aseo de la celda y si no quería hacer el aseo debía pagar una multa en plata o en cigarros que se compraban en el kiosco que había en la cárcel y si no lo hacían las otras presas las golpeaban.

Expresa que debido a la presencia de las detenidas políticas colapsó la capacidad de la sección femenina y estaban en estado de hacinamiento, debiendo turnarse las actoras para poder dormir en las camas.

Dice que tan arbitraria fue la detención que no se consideró la edad de las actoras. Así pues, según la inscripción de la Circunscripción Punta Arenas del Registro Civil, con el número de inscripción 1.129, del año 1967, consta el nacimiento de Nadia Isabel Parra Millatureo, R.U.N.: 11.219.294-8, el que ocurrió el



día 22 junio 1967; por lo que a la fecha de su detención tenía apenas 16 años; y según la inscripción número 1.265, del año 1966, Sandra Angélica Parra Millatureo, R.U.N. : 10.861.610-5, nació el día 15 julio 1966; por lo que a la fecha de su detención tenía apenas 17 años.

Explica que de esta forma ambas detenidas eran menores de edad, por lo que correspondía de acuerdo al artículo 26 de la ley 16618 vigente a esa época, derivarlas de inmediato al Juzgado de Menores quien debía "...8) Conocer de todos los asuntos en que aparezcan menores inculpados de crímenes, simples delitos o faltas, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 28º, y expedir la declaración previa sobre si el mayor de dieciséis años y menor de dieciocho ha obrado o no con el discernimiento; "...9) Aplicar las medidas contempladas en el artículo 29º a los menores de dieciséis años, como a los mayores de esa edad y menores de dieciocho que hayan obrado sin discernimiento y ejecutado un hecho que, si se hubiese cometido por mayores de esa edad, habría constituido delito.."; este trámite nunca se hizo, y jamás se ofició al Juzgado de Menores informando la detención de estas menores de edad.

Agrega que, de la misma forma, respecto de estas dos últimas actoras, al dejarlas detenidas junto a presidiarias rematadas en la cárcel pública de Punta Arenas se violó el artículo 17 de la ley 16618, que señalaba que "Se prohíbe a los jefes de establecimientos de detención mantener a los menores de dieciocho años en comunicación con otros detenidos o reos mayores de esa edad."

Expone que la misma ley 16618, señalaba una prohibición de ingresar menores a una cárcel pública, así pues el artículo tercero transitorio señalaba que "3º Los menores que, a la fecha de vigencia de la ley 16.520, se encontraren reclusos por medida de protección en los establecimientos penales de la República, deberán ser puestos a disposición del Juez de Menores respectivo, con el fin de que éste determine su internación en alguno de los establecimientos indicados en la presente ley o le aplique alguna de las otras medidas indicadas en el artículo 29º. Por demás el inciso segundo del mismo Artículo disponía que "Los que se encuentren detenidos, procesados o condenados por crimen, simple delito o falta, pasarán a los respectivos Centros de Readaptación, a medida que ellos sean creados, disponiéndose entretanto, las medidas para obtener su total segregación del resto de la población penal en los establecimientos en que actualmente estuvieren reclusos" lo que no se cumplió de modo alguno respecto a las detenidas menores de edad.

Señala que las dos menores, Sandra y Navia estuvieron 20 privadas de libertad, durante ese período no se les tomó, declaración y no se les permitía ir a la visita de cárcel de los Jueces del Crimen ni tampoco recibir visitas de familiares siendo la única visita que tuvieron la del Obispo Tomás González Morales y la de los abogados de la Vicaría de la solidaridad.



Menciona que mientras estuvieron presas fueron visitadas por el obispo Tomás González, quien tomó noticia de que estas menores estaban detenidas comprometiéndose a gestionar la liberación de las actoras la que ocurrió a los pocos días, permaneciendo Rosalba Presa hasta completar un mes de privación de libertad. Durante estos días las actoras vivieron en completo hacinamiento.

Indica que luego de salir de la cárcel las actoras sufrieron una constante persecución ya que había vehículos que las seguían y a veces controlaban la identidad de las actoras sin ningún motivo. Esto amenguó cuando la actora Rosalba Parra denunció este acoso a la vicaría de la solidaridad y la persecución cesó con el retorno a la democracia

Expresa que los días en que sus representadas estuvieron privadas de libertad, tuvieron incertidumbre, miedo de lo que les podría pasar, ya que las habían amenazado de que iban a “morir como perras”. Era de público conocimiento que los funcionarios de las Fuerzas Armadas en dicha época desaparecían y/o fusilaban ciudadanos. El hambre, miedo e incertidumbre, eran parte esencial de cada día en dicho recinto carcelario en condiciones de total hacinamiento donde además había población carcelaria rematada.

Agrega que tras “recuperar la libertad”, el asunto no quedó allí, lo vivido en dicha cárcel es imborrable y persigue a las demandantes hasta el día de hoy; ya que por un lado sienten la frustración haber estado injustamente y por razones políticas privadas de libertad y por otro lado hasta el día hoy les cuesta salir tranquilas a la calle, ya que sienten que siguen siendo vigiladas. En adelante las actoras se abstuvieron de participar en marchas y concentraciones políticas, pese a opositoras a la dictadura militar.

Destaca que a las demandantes no le resulta fácil recordar todo lo vivido, ya que, producto de la tortura física y psíquica hasta el día de hoy tienen lapsus de pérdida de memoria, quedándole como secuelas constantes diversos dolores, especialmente el dolor a las rodillas que aún tiene Sandra

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS:

Señala que por lo expuesto se debe entender que en Chile durante la dictadura militar se implementaron violaciones sistemáticas de los DD.HH, no por otros países, sino por el propio, especialmente por funcionarios de las FF.AA, a lo que se debe agregar a Gendarmería. Esta represión y violación de DD.HH en Magallanes se concretó por la eficaz coordinación de las Fuerzas Armadas y porque, como en historia es sabido, no fue un evento improvisado. Es decir, a lo largo del territorio nacional se planificó realizar el golpe de Estado. De manera que las implementaciones necesarias para aquello se realizaron tiempo antes de septiembre de 1973. Sin embargo, hay una diferencia entre Magallanes y el resto del país, que consistía en que la zona comprendía tanto al ejército, armada y fuerza aérea, la que por ser además una región estratégica del país (militarmente hablando) se puede



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

explicar el gran número de unidades de las FF.AA. Magallanes se subordinó por una estructura única la Región Militar Austral (RMA), comandada por la V división del Ejército cuyo mando ejercía el General Manuel Torres de la Cruz desde 1971. Dicha entidad tenía actividades de inteligencia, dice que no se ha de referir a la DINA, sino a la SIRMA, que es el Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral. La SIRMA funcionaba en el Antiguo Hospital Naval, conocido como “El Palacio de las Sonrisas”.

Expone que la represión en nuestro país fue progresiva, desde la implementación de patrullajes en diversos horarios, allanamientos de morada, entre otros. En Magallanes el ambiente no sólo era tenso, sino que era un daño en potencia, un ex prisionero político Carlos Audicio declaró: *“Para mí el exilio fue como estar muerto en vida. Fue sentir que te persiguen solo porque tú no piensas igual que el otro o porque tus ideales son distintos. Tenía 19 años recién cumplidos. A esa edad la vida recién comienza. Yo tenía muchas ilusiones al igual que otros muchachos. Nadie tiene derecho a cortarte tus ilusiones a esa temprana edad. El saber que eras uno de los más buscados, junto a varios compañeros más, fue terrible. Porque sabía que si te agarraban no llegabas a Punta Arenas, y que si tu familia se comunicaba con uno corría un gran riesgo. Lo que sufrieron mi padre y mi madre y mis hermanos fue terrible, yo le quite años de vida. Después caer detenido varias veces en la Argentina no podía sentirme seguro en ningún lado. Despertarse siempre asustado. Siempre pensando que mañana vuelves a casa y ese día no llega nunca, y así todo los días sin ningún proyecto porque mañana vuelves. Y al final después vuelves y se te produce otro exilio, porque nadie te conoce, se te cierran las puertas, dejas a hijos lejos porque tú no tienes derecho a hacerle a ellos pasar por lo mismo que pasaste tú, el exilio.”*

Menciona que el 11 de septiembre, todas las unidades de las FF.AA cerraron la ciudad de Punta Arenas, afectando toda vía de salida de los ciudadanos, ocupando todo lugar de encuentro de partidos políticos, sedes sindicales, la UMAG, escuelas, entre otras, declarando un estado de sitio con toque de queda. Las ciudades de Porvenir, Cerro Sombrero y Manantiales en Tierra del Fuego fueron ocupadas por fuerzas militares del Regimiento Caupolicán. La ciudad de Natales en Última Esperanza fue ocupada por Regimiento Lanceros.

Afirma que en Magallanes como otras regiones hubo cacería de personas, para secuestrarlas y llevarlas a lugares clandestinos.

Refiere que acorde al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura, en su página 420 señala *“(…) Los presos políticos de la región estuvieron en distintos recintos de las Fuerzas Armadas, los que funcionaron en su mayoría entre 1973 y 1977, tanto en la ciudad de Punta Arenas como en otras ciudades. El mayor número de detenidos se concentró durante 1973 y 1974. Quienes declararon dijeron que estuvieron detenidos en varios recintos y que eran trasladados para ser*



sometidos a interrogatorios, en camiones militares, aviones y barcazas. Indicaron que en todos los trayectos fueron hostigados y maltratados. Los interrogatorios estaban a cargo del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y actuaban también servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Marina. Fueron utilizados como recintos de interrogatorios y torturas algunos inmuebles de las Fuerzas Armadas o de particulares habilitados especialmente para estos efectos. La casi totalidad de los prisioneros, hombres y mujeres, pasó por esos recintos durante los años 1973 y 1974.

La cárcel de Punta Arenas, el Estadio Fiscal y el campamento de prisioneros de isla Dawson fueron recintos de reclusión en los años 1973 y 1974. La cárcel fue el único recinto que mantuvo prisioneros políticos durante todo el período del régimen militar. El principal campo de prisioneros de la región se ubicó en isla Dawson, lugar de reclusión de altos dirigentes del gobierno del Presidente Salvador Allende y también de numerosos prisioneros políticos de la región, principalmente de Punta Arenas. Otros recintos utilizados masivamente como lugar de reclusión en esta ciudad fueron el Estadio Fiscal, el Destacamento de Infantería Marina N°4 Cochrane y el Regimiento Motorizado N° 10 Pudeto. Estos recintos permanecieron en funcionamiento entre 1973 y 1974. (...)”

Agrega que el 26 de febrero de 1984 ocurrió el “puntarenazo”, acto en el cual decenas de personas se manifestaron en contra del régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Fue la primera vez en Chile que se escuchó personalmente gritos de oposición. Este evento fue un hito que desencadenó diversas protestas, tal y como reconoce el Informe de Valech I, al señalar que “(...) a raíz de las protestas nacionales y de movilizaciones sociales de oposición al régimen militar, desde el puntarenazo realizado en la Plaza de Armas de Punta Arenas en una visita del general Pinochet, se registró un alza importante de detenciones, especialmente de dirigentes políticos y sociales opositores. Ellos, luego de detenidos en movilizaciones masivas, en especial durante 1984. En este período los prisioneros sufrieron hostigamientos constantes de Gendarmería y a algunos los sacaban en la madrugada hasta la Fiscalía Militar para someterlos a interrogatorios y torturas, según consta de los testimonios presentados a esta Comisión. Numerosos declarantes denunciaron haber sufrido golpes dentro del penal por parte de los gendarmes, principalmente en el año 1973, así como cuando los llevaban a otros lugares para someterlos a interrogatorio (...)”.

Dice que acorde a lo expuesto, es un hecho cierto que hubo diversas marchas y protestas a partir del puntarenazo. Por lo que, se tomaron diversos detenidos, y como se acreditará, en este caso, fueron cerca de 90 detenidos hacinados en espacios reducidos.

Explica que durante la dictadura los ciudadanos fueron sometidos a torturas, lo que se aplicaba según criterio de inteligencia, es decir, nivel de peligrosidad, jerarquía en partido, entre otros, mediante prácticas como incomunicación,



aislamiento, privación de agua, comida y dormir, golpes de puños, patadas y laques durante largos periodos. Lo anterior correspondía a un nivel de intensidad, ya que el siguiente comprendía electricidad y simulacros de fusilamientos, mientras que el último, eran golpizas desnudos en las aguas del Estrecho de Magallanes, entre ramas de calafates, colgamientos en barcos, entre otros, todos con la vista vendada.

Afirma que los derechos básicos de miles de chilenos fueron vulnerados durante este periodo, el Estado de Chile es el responsable en todo momento, y bajo cualquier gobierno de la protección de los DDHH.

Como ya se explicó, respecto a las violaciones de derechos humanos, hubo diversos atentados contra los mismos, las detenciones eran variables, sin embargo, la tortura ejercida contra los presos durante su privación de libertad (en caso de sobrevivir) generó daños permanentes, en lo más profundo del alma. Ya que no se trata de un caso de un mal rato al ser privado de libertad y ser llevado a ante un Tribunal de Justicia a la brevedad. Sino que se trató de un abuso de poder mediante métodos inhumanos por las Fuerzas Armadas, órganos que debían proteger y servir al pueblo y/o nación, pero que durante el golpe de Estado fueron quienes torturaron gratuitamente a sus ciudadanos.

Destaca que, desde el 12 de septiembre, gran parte de los recintos de tortura se desbordaron en cuanto a capacidad. Es por ello que *“(...) empezaron a habilitar como centros de reclusión lugares capaces de mantener personas bajo vigilancia, como centros deportivos, centros culturales, centros de eventos, escuelas y liceos, edificios públicos, monumentos, hospitales, buques de la Armada y barcos mercantes de empresas privadas, contenedores portuarios, y dependencias de fundos, como casas patronales. En provincias, al tiempo que volvían a utilizarse antiguos campamentos de prisioneros, se construían apresuradamente otros nuevos. Tampoco se prescindió del recurso a las cárceles, disponiéndose el ingreso a los centros penitenciarios de Gendarmería por instrucciones verbales o escritas de las fiscalías militares, cuyas órdenes fueron frecuentemente impartidas al margen de todo juicio o proceso. (...)”*. Por lo que es otro antecedente de público conocimiento que las cárceles, como la de Punta Arenas, se utilizó como centro de tortura y/o privación sin juicio ni explicación, de libertad.

LA TORTURA

Describe que entre los actos inhumanos, la tortura fue uno de los principales durante el período del Régimen militar, y no sólo en los campos de concentración, sino que en los diversos centros de detención. De tal manera que al menos en Magallanes, se practicaron los siguientes actos:

- a. Trabajos forzados.
- b. Realizar tareas sin ropa dentro y fuera de condiciones climáticas soportables.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

- c. Aplicación de métodos de tortura con agua, chorros de agua durante largo tiempo en diversos lugares, como oídos, nariz, entre otros.
- d. Aislamiento.
- e. hacinamiento.
- f. Privación de orientación, manteniendo a los mismos encapuchados por lapsos de tiempo prolongados.
- g. Amenazas de muerte reiteradas al prisionero y respecto de familiares.
- h. Golpizas con partes de diverso armamento y/o mano limpia a los prisioneros.
- i. Encierro en lugares estrechos.
- j. Hacerlos realizar tareas vendados.
- k. Uso de electricidad.
- l. Uso de animales (perros).
- m. Drogas para obtener información.
- n. Medios brutales durante el interrogatorio con objeto de que la persona perdiese el conocimiento.
- o. Hacer soportar al preso al mar helado del Estrecho de Magallanes.
- p. Simulacros de fusilamiento.
- q. Ser apuntado por funcionarios de las FF.AA.
- r. Quemaduras en el cuerpo.
- s. Privación de alimentos y de líquidos Restricción de uso de sanitarios.

Dice que de estos métodos, al menos en la cárcel pública de Punta Arenas, se cumple el hacinamiento, amenazas contra la integridad de la persona del acto, golpizas, ser apuntado por funcionarios de las Fuerzas Armadas, desorientación, etc.

Indica que al respecto la Comisión Valech ha de ser tajante que no toda privación de libertad es tortura, es por ello que señala *“(...) La prisión no es en sí misma un método de tortura. Condiciones carcelarias agravantes de la prisión, como la incomunicación, tampoco pueden ser consideradas como un método de tortura per se, si bien implican una mayor vulneración de los derechos de la persona, aun en el caso de responder a un dictamen de la autoridad judicial competente en el marco de un debido proceso. Admitido lo anterior, debe precisarse que el confinamiento de una persona en una celda construida o ambientada con la expresa finalidad de provocar sufrimiento físico o psíquico, se considera como un método de tortura. Esta Comisión conoció numerosos testimonios referentes a confinamientos de esta índole.*

Las principales características de las celdas o lugares en los cuales las personas afectadas fueron confinadas son las siguientes:

- *Confinamiento en celdas en donde se privó al detenido de todo contacto con otra persona, por un período que podía prolongarse -en algunos casos- hasta por meses, provocando afecciones psíquicas propias de la deprivación sensorial y social. Hay relatos de personas que fueron reclusas en celdas estrechas, sin iluminación, sin*



ventanas ni ningún otro sistema de ventilación y sin servicios higiénicos, forzadas por tanto a orinar y defecar en el mismo lugar, mientras se les privaba de agua y ocasionalmente, se les suministraban alimentos en estado de descomposición, si es que no se las mantenía, lisa y llanamente, en ayuno forzado.

- Confinamiento solitario en celdas de tamaño en extremo reducido, verdaderas jaulas que no permitían permanecer de pie ni sentado, obligando a la persona afectada a soportar posiciones forzadas durante el día y la noche por períodos prolongados.

- Confinamientos colectivos en celdas, en bodegas de barcos o en jaulas, debiendo permanecer las personas apiñadas unas sobre otras y sin lugar para hacer sus necesidades fisiológicas.

- De los primeros meses de la represión política también existen testimonios referentes a situaciones de confinamiento solitario o colectivo en celdas donde había animales e insectos, tales como roedores, arañas, baratas y otros. (...)”.

Lo que atendido el caso, junto a las otras prácticas ya señaladas en la demanda, la privación de libertad en condiciones de hacinamiento corresponde a tortura.

Agrega que no podemos olvidar que el informe Valech I, señala que (...) *Las cárceles fueron recintos en los que permanecieron personas procesadas o condenadas durante todo el régimen militar, aunque en los primeros años también mantuvieron numerosos detenidos por orden de fiscales militares sin existir un proceso en su contra o bajo acusaciones vagas y arbitrarias (...).* Dicho de otro modo, sin proceso correspondiente, como ocurre en este caso, se vulneraron los derechos humanos de la parte demandante.

Dice que, además, la comisión Valech I, se ha hecho cargo de reconocer que no sólo personal de las fuerzas armadas ha efectuado actos vulneratorios en contra de sus ciudadanos, sino que también Gendarmería “(...) *En la década de 1980, la mayoría de los prisioneros eran procesados que habían sido detenidos en movilizaciones masivas, en especial durante 1984. En este período los prisioneros sufrieron hostigamientos constantes de Gendarmería y a algunos los sacaban en la madrugada hasta la Fiscalía Militar para someterlos a interrogatorios y torturas, según consta de los testimonios presentados a esta Comisión. Numerosos declarantes denunciaron haber sufrido golpes dentro del penal por parte de los gendarmes, principalmente en el año 1973, así como cuando los llevaban a otros lugares para someterlos a interrogatorios (...).*” Es decir, si bien algunos presos eran llevados a Gendarmería, estos últimos les rendían cuenta a las FF.AA, y junto a ellos torturaban a los individuos dentro de la cárcel.

FUNDAMENTOS DE LA INDEMNIZACIÓN

Expresa que se realizaron diversos actos en contra de los presos políticos, no todos físicos, sino que psicológicos, que los han de perseguir hasta la fecha, entre las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

actuaciones realizadas por funcionarios amparados por el Estado de Chile, en dicha época, nos encontramos con:

1. Daños físicos

2. Daños psicológicos: dice que aquí se debe entrar en detalle, ya que los daños físicos, en su mayoría, con el tiempo se han de recuperar, sin embargo, este tipo de daño es irreparable y que se debe a todo tipo de tortura que los prisioneros sufrieron durante su confinamiento, entre los perjuicios nos encontramos con:

a. Daño mental: que se comprende de neurosis, traumas, alteraciones en la psique, inseguridad social y en su persona, desconfianza ante el Estado y otros ciudadanos, interrupciones de sueño, angustia, enfermedades psicosomáticas, problemas familiares. Incapacidad de tener una vida normal. Heridas en el alma. Trastornos por violaciones en el caso de mujeres.

b. Pérdidas de oportunidades: laborales, educación, de prestaciones sociales, de afecto.

c. Separación del prisionero respecto a su familia, destrucción de la familia,

Todos aquellos daños, permanecen intactos, debido a la detención indebida, y tortura. No se trata de un abuso, sino de actos con conocimientos especiales, es decir, tortura especializada, ya que las FF.AA previo al golpe entrenaron a sus funcionarios en métodos para realizarla. Todo aquello tras el Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973.

Casos ejemplares en la región que aparecen en el Informe, que acreditan la violencia de la época:

a. *“(...) Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el antiguo Hospital Naval de Punta Arenas (Palacio de las Sonrisas), a cargo del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) , XII Región: Se le propinaron culatazos en los riñones al momento de subir por la escalera. Luego, cuando se le estaba interrogando, una persona que a cada rato lo insultaba fuertemente se le acercó por detrás de la silla y, seguidamente, con ambas manos al mismo tiempo, le golpeó los oídos [el llamado teléfono], provocándole la pérdida de conciencia momentánea. (Persona fallecida, relato efectuado por pariente habilitado).(...)”*

b. *“(...) Hombre, detenido en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el antiguo Hospital Naval de Punta Arenas (Palacio de las Sonrisas), a cargo del Ejército, XII Región: Fui llevado nuevamente vendado y amarrado de las manos a Colón 636. Me aplicaron corriente eléctrica, Cuatro días después me llevan nuevamente a interrogatorio, me colocaron en la parrilla, me amarraron las manos y los pies al catre de fierro, me aplicaron corriente eléctrica en los testículos (...).*

c. *“(...) El 30 de Octubre de 1973 fueron ejecutados en el Regimiento Caupolicán de Porvenir, Carlos Raúl BAIGORRI HERNANDEZ, de 31 años, profesor de la Escuela de esa ciudad, militante comunista; Germán Simón CARCAMO CARRASCO, 24 años, empleado de Socoagro, militante socialista; y*



Ramón Domingo GONZALEZ ORTEGA, 37 años, empleado del Servicio de Impuestos Internos, sin militancia conocida. Estas tres personas habían sido detenidas en forma separada en sus respectivos domicilio en fechas anteriores y luego de pasar por otros recintos, fueron conducidos al Regimiento Caupolicán de Porvenir. El 30 de Octubre en la madrugada, los afectados fueron sacados del lugar en que dormían y llevados por unos suboficiales al Polígono del regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte. Según testimonios confiables presentados ante esta Comisión, los detenidos habrían sido fusilados en el polígono a las 04:00 horas del día 30, con el objeto de efectuar una medida ejemplarizadora (...)”

d. José Toha González, quién falleció en 1974, fue ministro del Interior y Defensa del gobierno del presidente Allende. Detenido el mismo día del golpe militar, recluido en escuela militar y trasladado al Isla Dawson, luego por su salud al Hospital de Punta Arenas y posteriormente al Hospital Militar de Santiago. Quién murió por precarias condiciones físicas en la que se encontraba, debido a un grave estado de desnutrición. A sus familiares se le informó por el gobierno de turno que se había suicidado.

e. Silvio Francisco Bettancourt Bahamondes, militante del MAPU, el día 12 de Septiembre de 1973, apareció su nombre en la nómina de personas requeridas por las autoridades. Situación por la que abandono Punta Arenas escapándose a Río Gallegos. Sin embargo, desde dicho viaje nadie supo de él. Las autoridades nunca reconocieron su detención. Sólo de acuerdo con declaraciones de testigos, varios amigos del perseguido fueron detenidos e interrogados sobre su paradero. Y mediante declaración de un ex agente de seguridad, se tuvo presente que fue interrogado y torturado.

f. “Ramón González, funcionario público del SII de Punta Arenas, sin militancia política, detenido el 11 de Septiembre de 1973, fue trasladado a Isla Dawson al campamento Compingim, y ejecutado el 30 de Octubre de dicho año. La versión entregada a las familias a través de La Prensa Austral, era que él junto a otros detenidos con fecha 29 de Octubre se habían escapado. Y que por no hacer caso a los soldados se les disparó.”

En lo que corresponde a responsabilidad extracontractual, dice que se deben aplicar los siguientes criterios:

A. Responsabilidad por hecho ajeno:

Hace presente que no se trata sólo de un funcionario de las FF.AA que realizó los actos que vulneraron sus derechos, sino que el acto venía de una organización, es decir las FF.AA, bajo un sistema de escalas de mando, que incluso comprendió en el periodo a una organización ajena, como Gendarmería y Carabineros.

Agrega que durante tiempos adversos en nuestro país, donde por conocimiento, e inclusive duda de la postura política de un ciudadano, este sería sometido a actos inhumanos. Actos en los que incluye a Gendarmería, toda vez que



participaron y fueron cómplices del hacinamiento y de las torturas que sufrió junto a otros manifestantes. Actos que como se han mencionado en el cuerpo del escrito, no son atribuibles a determinadas personas exclusivamente, sino que al Estado, cuyas garantías no fueron entregadas, que permitió clasificar ciudadanos. De manera que el Estado de Chile no es un ente incapaz de actuar, ya que, como órgano, tiene diversos subalternos con poder de representación, cuyos actos desde septiembre de 1973 deben de ser indemnizados, vale aclarar que la responsabilidad civil, normalmente por el artículo 2317, permite a los demandantes dirigirse contra el funcionario negligente del Estado, como contra el mismo. De manera adicional, vale aclarar que el requisito de hecho voluntario se cumple, al reconducir el daño a una conducta de un sujeto, sea por acción u omisión.

B. CULPA:

Señala que en lo que respecta a la responsabilidad extracontractual, no interesa saber si los funcionarios actuaron de dicha manera por circunstancias personales, sino que sólo es relevante la manera en que dichos dependientes debieron actuar en el correcto ejercicio de sus funciones. Los funcionarios de los agentes del estado, tienen desde el año 1951 un reglamento de disciplina, bajo el decreto N°1445 del Ministerio de Defensa Nacional, que en diversas disposiciones regulan su actuar intachable, sea el artículo 26, que exige vida sobria y honorable, entre otros, cuestionándose si ¿Es una vida sobria y honorable torturar a un ciudadano sin que medie una guerra? La respuesta es obvia, no podemos esperar de las FF.AA un acto que no sea la defensa del país, cuidado con el ciudadano, que brinden seguridad a la nación. Más no están autorizados para realizar los actos mencionados en los hechos. E inclusive, no sólo las FF.AA son culpables, sino que cada una de las organizaciones que colaboró sustancialmente con ellas, como Carabineros y Gendarmería. Quienes cumplieron con órdenes a costa de sus ciudadanos.

Indica que si bien es cierto que bajo la organización jerárquica hubo órdenes por parte del alto mando, bajo una época en la que negarse a realizar una orden podría significar traición, y/o sufrir el mismo tipo de castigos que a los presos políticos, aquello no quita que exista responsabilidad, en específico del Estado.

Dice que, recordando el estándar de culpa, en lo que corresponde a responsabilidad extracontractual, implica ver qué tipo de acto hubiere hecho la misma persona bajo las mismas circunstancias. Situación en la que el Estado de Chile pudo haber tomado otro camino, sin necesidad de prisión, interrogatorio y tortura.

C. Vínculo de Subordinación y dependencia

Menciona que ya se aludió al tema, entendiendo que nos encontramos ante responsabilidad del Estado, debido a sus subalternos.

D. EL DAÑO

Expresa que conforme a lo expuesto, nos encontramos ante vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos mientras estuvieron privadas de libertad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

(tortura) y hasta el término del régimen militar (por las inspecciones sorpresas con amenazas tanto en la vida privada como laboral).

Antes de analizar este daño, dice que debe aclarar que nuestra legislación busca la reparación del daño integral, la que según el artículo 2329 del Código Civil, al expresar “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta” no limita la aplicación del daño moral sólo a sede extracontractual o contractual, y mucho menos a leyes especiales.

Además se puede fundamentar dicho precepto con la idea del artículo 2315 del Código Civil, que a diferencia del primero, se limita a las cosas, pero siguen el mismo fin, es decir, que todo daño debe de ser reparado, sea en las personas como en las cosas.

Aclara que el precepto 2329 del Código Civil, al decir toda persona, implica considerar que en nuestro ordenamiento tanto las personas naturales como jurídicas deben responder por los daños e incumplimientos contractuales respectivos, especialmente, si se trata de un daño que no ha cesado. Ya que seguimos con pactos de silencio, por lo que jamás podremos saber qué funcionarios del Estado torturaron, amenazaron y persiguieron a las actoras, sino que sólo se trata del Estado de Chile, que actuó mediante sus fuerzas armadas y policiales contra todos los presos políticos.

Agrega que el autor nacional Pablo Rodríguez Grez (Rodríguez 2002) define la categoría jurídica de daño moral como: *“(...) la lesión de un interés extrapatrimonial, personalísimo, que forma parte de la integridad espiritual de una persona, y que se produce por efecto de la infracción o desconocimiento de un derecho cuando el acto infraccional se expande a la esfera interna de la víctima o de las personas ligadas a ella (...)”*.

Expone que tal como comenta luego el autor recién citado: el daño moral deriva de la lesión de un derecho cuando los efectos de este no sólo menoscaban los intereses jurídicamente tutelados por la norma, sino que penetran la intimidad de la víctima y de quienes forman parte de su círculo más próximo, afectando sus sentimientos, emociones, expectativas, afectos y en general, sus valores de afección.

Un factor que requiere especial mención, ha de ser tratado en el informe de Rettig, señalando que entre los actos realizados por las autoridades en dicha época, hubo negación de dar explicación a la familia de la detención, tal como del lugar, permiso de visita, entregar cadáver en urna sellada (sin garantía que aquel sea el familiar), ocultar la muerte, actos de extorsión a los familiares, entre otras conductas. Que no pueden desconocer un daño moral en los familiares, quienes ante dicha época conflictiva, tuvieron la paciencia, pertinencia para defenderlos legalmente, honrarlos, e intentar contactarse con ellos.

Dice que pese a que se explicó la tortura y se realizó mención de su crueldad, se requiere tener presente para su indemnización algunos de los métodos utilizados durante los años de la dictadura militar. Entre ellos encontramos diversos aludidos



por el informe de la comisión de verdad y Reconciliación, en su volumen I, donde se describen métodos como:

- a. La Parrilla: que consiste en aplicar electricidad.
- b. Colgamientos: tal como lo dice la palabra, implica hacer que una persona esté en una estructura colgando de alguna extremidad, soportando todo su peso.
- c. Hundimientos: se sumerge la cabeza de la persona en un recipiente con alguna sustancia, hasta que esté a punto de ahogarse.
- d. Golpes
- e. Privación de alimento y agua
- f. Hacinamiento
- g. Tortura psicológica: Mencionar que se secuestraron familiares, que se les haría daño, que se les fusilaría, entre otros.
- h. Daños con heridas de bala, armas blancas.
- i. Violación u amenaza de violación a los presos.
- j. Inyección de drogas durante la interrogación

Agrega que si bien la jurisprudencia y la doctrina se hacen cargo del daño moral y subclasificaciones, como el perjuicio estético, pretium doloris, de agrado, psíquico, sexual, entre otros. En el caso de marras, no se puede limitar sólo a uno de ellos el daño generado, sino que por los métodos utilizados y la persecución que sufrieron las actoras tras “recuperar” la libertad (ya que, por las conductas de los agentes del Estado, existió un temor permanente a ser sometido a una nueva detención y/o que aquello le ocurriese a algún familiar), constituyen un daño moral arraigado en lo más profundo del ser.

Indica que las conductas descritas en los hechos de la demanda, ya que por este tipo de torturas tiene lagunas, por lo que es dable esperar que se aplicaron más métodos en su contra. Es decir, por los actos inhumanos su proyecto de vida fue alterado por completo, de modo que durante años ha presentado sufrimiento en su vida cotidiana, angustia, crisis de pánico, pesadillas recurrentes, e incluso tiene temor de encontrarme con un uniformado. Es decir, a casi 40 años de los hechos, no ha logrado superar lo ocurrido.

Por este actuar inhumano, bestial, perdió su calidad de persona y ciudadano inmediatamente. Se afectó su dignidad a tal punto, que a estas alturas, no podría reforzarse. Sigue buscando explicación de por qué le tocó pasar por esto, ¿qué daño o peligro representaba en ese entonces para tener que ser sometido al trato expuesto?. Todo por participar en una marcha pacífica.

Señala que, entonces, como ya se adelantó, todo daño debe de ser reparado. En particular el daño moral por su naturaleza requiere que la reparación sea una indemnización que proporcione las bases para obtener goces equivalentes que compensen la pérdida, sufrimiento, dolor, aflicción, pesar. Como dice Mazeaud, dar a la víctima el medio de procurarse satisfacciones equivalentes a aquella de las que



fuera privado. Pretium doloris, que pese a ser evidente, ya que figuro en las nóminas de presos políticos, es esperable y notorio por lo que tuve que vivir, sin haberme expuesto al daño previamente. En otras palabras, se deben considerar algunos criterios para la indemnización del daño moral, que en este caso se han de cumplir, que son:

a. conducta del agente: el presente criterio sirve para entender que la conducta no sólo fue negligente por parte del Estado y de sus funcionarios, sino que dolosa. Ya que se evaluaba y planificaba a quién detener y torturar. La detuvieron en la marcha junto a otros manifestantes sólo por marchar, por pensar diferente. E inclusive, como no lograron categorizarle en un color político, le inventaron cargos para luego continuar bajo vigilancia y detenciones sorpresa.

b. Esto no fue un asunto de azar, sino que fueron actos coordinados por un sistema de inteligencia que buscaba eliminar cualquier riesgo al gobierno, aunque las actoras no fuese una figura política pública.

c. Facultades económicas de las partes: En el presente caso, frente al demandado, existe una clara e indudable diferencia económica, ya que el Estado perfectamente podría indemnizar el monto solicitado. Hablamos de un ente que gasta cantidades parecidas sólo para la ciudad de Santiago en lo que respecta al transporte, o renovación de parques, entre otros, indemnización no es un problema, sino una solución para no tener que pagar nuevamente en el futuro.

d. Prudencia y equidad: este criterio implica no recibir un monto que no pueda dentro de lo posible solventar y apoyar a los demandantes tras el actuar negligente y doloso del Estado de Chile en Porvenir, pero tampoco debe ser uno impagable para el mismo. De manera que la suma debe reflejar cierto límite, que se cumple en el caso de marras, ya que las vulneraciones a los DD. HH aludidas en el presente libelo, son aquellas que no son pasajeras, sino que quedan en lo más profundo de los afectados, siguiéndolos para toda la vida, dolores irreparables, que requerirán tratamientos necesarios, cuyos gastos a lo largo de los años, debe ser pagado, y asegurar el pago de los próximos.

Expresa que no deben de obviarse las secuelas que dejan este tipo de detenciones, que según sus características causaron gran impacto en cada uno de los presos políticos. No ser sometido a un procedimiento justo, no recibir defensa jurídica ni apoyo alguno. No hablamos de mera tortura física o psicológica, sino de efectos del golpe de Estado. Es así como *“(...) Al encontrarse denigrados, excluidos y acosados, muchos decidieron partir al exilio. Quienes se quedaron, debieron sobrellevar la estigmatización y la persecución en sus lugares de residencia. Algunos fueron detenidos varias veces y debieron mudarse a otras ciudades. Otros al permanecer en sus pueblos, tuvieron que convivir con sus torturadores, algunos de los cuales siguieron desempeñando funciones públicas. EN estas condiciones, resultó muy arduo retornar el curso de sus vidas. (...)”*



Estas secuelas, se pueden apreciar en el informe de Comisión Nacional Prisión Política y tortura, que mencionan respecto a los presos políticos junto a “(...) trastornos de su salud física y mental, se sumaba la perturbación de sus relaciones sociales, afectivas, sexuales, que llegó a deteriorar, a menudo, los vínculos familiares y sus parejas, lo que había causado, en muchos casos, rupturas insalvables”.

Dice que es importante considerar que la obligación de los estados, de reparar las violaciones en lo que corresponde derechos humanos, ha sido uno de los principios del derecho internacional público.

Por lo que estima el daño moral de las actoras en la suma de \$200.000.000.- cada una.

Expone que hoy día, diversas normas internacionales estipulan el derecho a la reparación, entre ellas:

1) CONVENIO DE GINEBRA, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949

Aquel convenio en su artículo 2 y 3 han de versar sobre su aplicación y respecto a los conflictos no internacionales. Sin embargo, pese a que regula por regla general el conflicto entre naciones, en su artículo tercero exige ciertos estándares mínimos, como que todos los que no participen en el combate, deberán ser respetados en su vida e integridad corporal, libre de trato cruel, tortura, rehén, atetados contra su dignidad personal, entre otros. Imponiendo obligaciones a que todo herido deberá ser asistido, entre otros.

En dicho convenio, se define de manera adicional que es un prisionero de guerra, el artículo 4 explica que se trata de:

“(...) A. Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones:

- a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;*
- b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia;*
- c) llevar las armas a la vista;*
- d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra; (...)*”



Indica que no encontrándonos para el caso concreto de la dictadura militar ante un prisionero de guerra, sino ante la retención de ciudadanos, quienes por tener un pensamiento diferente, fueron vulnerados en todos sus derechos.

Agrega que en conformidad a los artículos 13 y 14 del convenio, se menciona el trato humano a los prisioneros, que por el hecho de ser prisionero no deberá ponerse en peligro su salud de manera alguna, tortura, insultos, entre otros.

Artículo 22: los prisioneros de guerra no podrán ser internados más que en establecimientos situados en tierra firme y con todas las garantías de higiene y salubridad; excepto en casos especiales justificados por el propio interés de los prisioneros, estos no serán internados en penitenciarías.

Respecto de la llamada Ley de Fuga aplicada y mencionada reiteradamente por los mandos de la dictadura militar y sus mandos dependientes, conviene recordar el artículo 92 que dispone que “un prisionero de fuera que intente evadirse y sea capturado antes de haber logrado la evasión en el sentido del artículo 91 no será punible, incluso en el caso de reincidencia más que con castigo disciplinario”

En lo que corresponde al trabajo de los prisioneros, los artículos 49-53, estipula normas que el estado debe de respetar, que se realice explotación de ellos siempre que sean físicamente aptos, en labores como agricultura, industria, servicios domésticos, comerciales, transporte, entre otros.

Lo anterior bajo condiciones de trabajo convenientes, con vestimenta, alimentación y alojamiento que les permita desenvolverse. Evitándose de antemano que no puedan realizar contra su voluntad faenas insalubres o peligrosas. Y bajo jornadas no excesivas. En otras palabras, el tercer convenio de Ginebra, detallaba una situación humana para los prisioneros de guerra. Asunto que no ocurrió en nuestro país, era insólito considerar que el trato sería respetando al prisionero, sin abuso de poder alguno. Estos convenios constituyeron un gran paso de avance en la humanización de los conflictos y un precedente para el Derecho internacional Humanitario que actualmente es sistema normativo acatado por todas las naciones civilizadas del planeta. Hay otros tratados que asumen los principios o puntos de partida de los derechos humanos y precisan disposiciones, pero lo más trascendente es el pacto de San José de Costa Rica. El cual con fecha 22 de Noviembre de 1969, el gobierno de Chile suscribió en la ciudad de San José, Costa Rica, la Convención Americana sobre DD. HH. Vale aclarar que en 1969, Chile suscribió, más no ratificó el mismo, sino hasta 1991 mediante el decreto 873 del Ministerio de Relaciones exteriores.

2) **El Pacto de San José de Costa Rica**, es interesante para este libelo, ya que en su artículos 1 y 2, estipula el deber del estado de respetar derechos y libertades reconocidos a toda persona, obligando al Estado a garantizarlo estipulando normas que integren este tratado.

Dicho pacto además dice en los artículos citados “(...)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. (...)

Sin embargo es de vital importancia citar el artículo 4 de dicha convención: “(...) Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. (...)”.

Este derecho a la vida se complementa con el artículo 5, que exige que se respete la integridad física, psíquica y moral, y especialmente “(...) Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (...)”

De vuelta al tratado de DD. HH mencionado, hace presente que en sus artículos 6 y siguientes, se abole todo tipo de esclavitud, se da derecho a la libertad personal, salvo que alguna ley previa dispusiere algo que la pudiese limitar. Por lo que cada detención realizada en el Régimen militar debió de realizarse llevando ante la justicia al sospechoso, bajo un argumento que permitiere sancionar. Asunto que en dicha realidad era imposible de exigir, debido al abuso del poder.

Agrega que antiguamente no se indemnizaban este tipo de acciones, sino que tras la interpretación que mantiene actualmente la Excelentísima Corte Suprema se han aplicado conjuntamente dos preceptos en específico para dar lugar a esta. Que son el artículo 1.1 y el artículo 63.1. Este último dice “(...) 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.(...)”.

Menciona que lo expuesto, se ratifica en el fallo de la causa Rol N° C-682-2016 del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas que dice “(...) En efecto, nuestro



máximo tribunal sostiene que lo previsto en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de la cual los Estados partes se comprometen a respetar los derechos humanos de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción y en caso de ser violados debe propenderse al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, implica que la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad queda sujeta al derecho internacional. Por otra parte, dicha normativa internacional obliga al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la integra reparación, lo que viene a limitar y condicionar la actuación de los poderes públicos conforme lo previenen los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República. (...)”

Indica que vale hacer presente que el derecho a la igualdad, que hoy existe en nuestra Constitución, proviene del pacto aludido, en su artículo 24, situación que al momento que Chile suscribió no podría considerar en la práctica dos o más clases de ciudadanos. Por lo que nos referimos a los presos políticos, compatriotas que durante el régimen militar sufrieron vulneraciones irreparables.

Refiere que el deber de reparar el daño por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado es uno de los Principios adoptados por las Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución 60/147 de 2005, ha entregado pautas para el cumplimiento de esta obligación en materia de derechos humanos, las que apuntan a la reparación integral, lo que implica la adopción de diversos mecanismos, que van desde la indemnización de perjuicios susceptibles de evaluación pecuniaria, hasta reparaciones simbólicas. En el mismo sentido ha apuntado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El artículo 63.1 de la Convención Americana de derechos humanos prescribe lo siguiente: 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Agrega que tal como la Corte Interamericana lo ha indicado (Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 43), este artículo reproduce el texto de una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del actual derecho internacional de la responsabilidad de los Estados (cfr.: Usine de Chorzów, compétence, arrêt no. 8, 1927, C.P.J.I. série A, no. 9, p. 21 y Usine de Chorzów, fond, arrêt no. 13, 1928, C.P.J.I. série A, no. 17, p. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 184). Así lo ha aplicado esta Corte (Caso Velásquez



Rodríguez, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 7, párr. 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 8, párr. 23; Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 14); Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 36; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 15). La jurisprudencia ha considerado también que la responsabilidad consagrada en esta disposición es un corolario necesario del derecho (sentencia arbitral de Max Huber del 23.X.1924 en el caso de los bienes británicos en Marruecos español, O.N.U., Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 641; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 33). Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional. Con motivo de esta responsabilidad nace para el Estado una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de reparar.

3) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Expone que la Constitución de Chile dispone lo siguiente:

Artículo 1 “(...) Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. (...)”,

Artículo 5 “(...) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes (...)”



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

Artículo 6 “(...) los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley (...)”

Artículo 7 “(...) Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale (...)”

Artículo 19:

Nº 1 “(...) La Constitución asegura a todas las personas: 1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. (...)”

Nº 2 “(...) La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; (...)”

Nº 3 “(...) La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitraré los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.

Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.



Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella; (...)

Nº 4 “(...) El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley (...)”

Nº 5 “(...) La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley; (...)”

Nº 6 “(...) a libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones; (...)”

Nº 7 “(...) El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia:

a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;

b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes;

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas;

d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito;

e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9º, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple;

f) En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley;

g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas;

h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales,
e

i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia; (...)"



4) OTRAS NORMAS

Expone que hoy la ley 20.357 en su artículo primero ha de tipificar que tipos de crímenes son de lesa humanidad, de lo que se entiende como parte de un ataque generalizado contra una población civil, estipulando en sus demás artículos diversas sanciones, crímenes de guerra, entre otras. Pese a lo que se aplica por regla general en el daño civil, en materia de daño extracontractual moral, las vulneraciones a los derechos humanos son imprescriptibles, por lo que el límite de los 4 años del Código Civil no será un impedimento para exigir la reparación a esta parte. Es así, que de los artículos 2314, 2317, y 2329 del Código Civil, se regula el daño moral, mediante normas que exigen que todo daño debe ser reparado.

Destaca que pese a lo expuesto, nuestro país ha dado tal importancia a este tipo de asuntos, que inclusive se ha dedicado un día para el preso político, según lo expone el sitio web http://www.ddhh.gov.cl/n119_30-10-2015.html; que se realiza el 29 de Octubre. Sin embargo, aquello no es una solución, sino un mero reconocimiento de que fueron violados derechos y que debe de buscarse medidas para encontrar la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas de la dictadura.

Dice que también debe recordarse, que en esta materia, ya se ha declarado que procede la indemnización de los presos políticos. Con objeto de mencionar algunos fallos de la Excelentísima Corte Suprema constan las causas Rol N° 3058-2014, Rol N° 1092-2015 Rol N° 13762-2016, entre otros.

Agrega que el punto de esta demanda y el monto de indemnización mencionado, no busca desconocer el trabajo que se ha realizado para promover los DD.HH, sin embargo, aquello no es, ni será una solución. No se traduce dicho trabajo en compensación alguna para los presos, exiliados y sus familias, no permite cerrar el capítulo de dolor. Y es entendible que un monto económico no podrá cumplir con aquello, sino que la reparación pecuniaria busca cumplir con el acercamiento a una solución. No es lo mismo tener dolor, que tener dolor con algún apoyo pecuniario que permita a la víctima y/o a sus herederos la posibilidad de salir adelante y poder colaborar con dar vuelta la página. Los preceptos para considerar del Código Civil son los artículos 2314 y 2320, que permiten entender que todo daño debe ser reparado (indemnizado) y de que toda persona es responsable tanto de sus acciones como de las que estuvieren a su cuidado, aplicándose perfectamente al Estado para responder por los hechos ocurridos durante la dictadura.

De manera adicional, señala que no sólo nos encontramos con la creación de normas que pueden inducir a que el Estado ha intentado trabajar por dar vuelta la página, sino que, en virtud de sus políticos, especialmente aquellos que forman parte del poder legislativo, han de sembrar la semilla de odio y/o en el caso que ya hubiere existido, reforzar el mismo, sólo con el objeto de estar en poder. Situación que el Estado debe evitar, ya que con ese tipo de mensajes por parte del legislativo el daño se mantiene a lo largo del tiempo, y aumenta el dolor de las víctimas y sus familiares,



impidiendo de manera paralela, que se pueda trabajar en reformas profundas para una reparación íntegra.

Dice que en virtud de lo expuesto, viene en reclamar una indemnización de doscientos millones de pesos el por secuestro, torturas, y confinamiento vividos por las actoras en los calabozos de Carabineros y Cárcel Pública de Punta Arenas.

XXIII. DE LA PETICIÓN CONCRETA

Expresa que como consecuencia de los hechos mencionados, y daños derivados de violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile, mediante actos de secuestro, torturas, vigilancia y persecución, actos que ninguna suma de dinero podrá reparar en su totalidad, sin embargo esta parte solicita una suma de \$200.000.000 por cada una de las actoras a fin de que la reparación sea íntegra y cumpla los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Por tanto, en conformidad a lo establecido en los artículos 2 y 3 del Convenio de Ginebra de 1949, 1, 2 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 1, 5, 6, 7, 19 N° 1- 7 , y siguientes, de La Constitución Política de la República de Chile; artículo 1 de la ley 20.357; artículos 2314-2029 del Código Civil; y artículos 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; solicita tener por interpuesta demanda en juicio de hacienda por indemnización de daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, ya individualizado, y ordenar que se condene a la demandada a pagar las siguientes sumas:

1.- La suma de \$200.000.000 a cada una de las actoras o lo que se estime pertinente por concepto de daño moral en favor de las demandantes.

2.- A pagar el reajuste y el máximo de interés legal a partir de la fecha de interposición de la demanda.

3.- A pagar las costas de la causa.

4.- O a pagar la suma que se estime pertinente y por los conceptos que se estime pertinentes.

Que, en el folio 9, la parte demandada contestó la demanda.

Que, en el folio 13, la parte demandante evacuó la réplica.

Que, en el folio 15, la parte demandada evacuó la dúplica.

Que, en el folio 19, se recibió la causa a prueba.

Que, en el folio 92, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el folio 1, Juan José Claudio Arcos Srdanovic, abogado, en representación de doña Nadia Isabel Parra Millatureo, doña Rosalba Marina Parra Millatureo, y doña Sandra Angélica Parra Millatureo, interpone demanda en juicio de hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, representado legalmente por el Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Magallanes, don Claudio Patricio Benavides Castillo, o quien legalmente lo subrogue,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

por las razones de hecho y derecho reseñadas en la expositiva, las que se dan por expresamente reproducidas, por economía procesal.

SEGUNDO: Que, en el folio 9, la parte demandada contestó la demanda, solicitando desde su total rechazo, con costas, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

I. DE LA DEMANDA.

Menciona que las demandantes señalan haber sido detenidas, como prisionero político en contexto de la dictadura militar que existió en Chile entre los años 1973 y 1990, por Carabineros en el mes de marzo de 1984, permaneciendo retenidas en los calabozos de Carabineros y en la ex cárcel pública de Punta Arenas, durante un periodo de tiempo de 20 días, señalando haber sufrido malos tratos, tocasiones indebidas en sus cuerpos, hacinamiento, todo ello sin considerar que Sandra y Nadia eran menores de edad durante su detención, y que tras su liberación sufrieron persecución.

Agrega que las actoras reclaman la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) para cada una de ellas, por los daños físicos, psicológicos que divide en:

a. Daño mental: que se comprende de neurosis, traumas, alteraciones en la psique, inseguridad social y en su persona, desconfianza ante el Estado y otros ciudadanos, interrupciones de sueño, angustia, enfermedades psicosomáticas, problemas familiares. Incapacidad de tener una vida normal. Heridas en el alma. Trastornos por violaciones en el caso de mujeres.

b. Pérdidas de oportunidades: laborales, educación, de prestaciones sociales, de afecto.

c. Separación del prisionero respecto a su familia, destrucción de la familia.

Refiere que la demanda señala que existe responsabilidad extracontractual del estado, por el hecho ajeno de los subalternos del Estado de Chile actuando con culpa. Invocas los artículos 2315 CC y 2329 CC. Como fundamento para la reparación integral del daño moral alegado.

Dice que invoca los cuerpos normativos que conforman el Derecho Internacional de los DDHH para configurar la pretendida responsabilidad estatal, Convenio de Ginebra de 1949, Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Pacto San José de Costa Rica, Convención americana de DDHH, todo ello con alegar disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República.

II. DEFENSA FISCAL.

1.- CONTROVERSIA DE LOS HECHOS.

Expresa que las demandantes no aportan en su demanda antecedente alguno en cuanto su reconocimiento oficial como torturadas o presas políticas por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en la demanda solo se expone el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJYXX

relato que las actoras formulan sobre lo que les habría sucedido y que resume en que habrían sido víctimas de detención y aplicación de tormentos por agentes del Estado.

Dice que es importante tener presente que las demandantes no aparecen reconocidas como víctimas por la Comisión de Verdad y Reconciliación en el Informe Valech, previsto en la ley 19.992, consecuentemente tampoco son beneficiarias de pensión de reparación alguna.

Indica que este hecho tiene relevancia, porque precisamente las personas que se hubieran sentido afectadas por violencia política podían concurrir a la Comisión Valech de Verdad y Reconciliación para contar su verdad y ser calificados como Víctima de violencia, prisión política y tortura. Sin embargo, las actoras no concurrieron a ninguna Comisión. Además, el procedimiento administrativo de la Comisión Valech fue construido para dar garantías de un reconocimiento estatal masivo, cuestión que las demandantes no cumplen.

En consecuencia, la defensa fiscal controvierte formal, material, sustancial y expresamente los hechos expuestos en la demanda como las consecuencias de derecho que de ellos se seguirían, en los términos dispuestos por el artículo 1698 del Código Civil.

2.- EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

Opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de las acciones conforme a los siguientes argumentos.

a) Normas de prescripción aplicables.

Opone la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria deducida en autos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Menciona que según el relato fáctico de las demandantes, los hechos denunciados, han ocurrido el año 1984.

Expresa que es del caso que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, 16 mayo 2022 ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la demanda como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del



Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

b) Generalidades sobre la prescripción.

Señala que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. *“Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”.*

Afirma que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Dice que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”*

Sobre esta materia agrega que cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Indica que efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente:

“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Explica que esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Señala que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil).

Agrega que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado y como es sabido, toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.



c) Fundamento de la prescripción.

Expone que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Por ello es posible, sin duda, que la prescripción se produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones.

Dice que en la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones -que al igual que en la usucapión cumple una función de adquisición y otro de prueba del derecho- es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción.

Menciona que, de esta manera, los planteamientos doctrinarios anteriores permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas. Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Agrega que no está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, dice que, como más adelante veremos, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

d) Jurisprudencia sobre la prescripción.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

i. La sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013.

Expresa que como es de público conocimiento, nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Explica que en dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

Señala al respecto el fallo:

“Octavo: Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia”.

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

Al efecto, el citado fallo dispone:

“Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991.”



“Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1º sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido.”

“Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio.”

“Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.”

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la



responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

Así, junto al considerando octavo antes citado, dispone el fallo en su considerando décimo que:

“Décimo: Que, de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto”.

4º) Que, no obstante, la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia;

ii.- Otros fallos de la Excma. Corte Suprema en la materia.

Indica que además de lo anterior, existen numerosas sentencias en el mismo sentido, a partir del año 2007, que constituye jurisprudencia uniforme respecto a la materia, y que por lo tanto han acogido la excepción de prescripción, en los términos planteados por esta parte.

e) Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

Expone que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Señala que sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, dice que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

f) Normas contenidas en el Derecho Internacional.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

Finalmente, en cuanto a la alegación del demandante sobre la imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, indica que se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque solo algunos de ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Menciona que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema 8 - que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Expone que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Señala que la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Agrega que la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de la que hemos de señalar que sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atingente al caso sub-lite puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria,

En relación a esta Convención destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.



Por otra parte, dice que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. La norma señala:

“63.1.- Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Dice que el planteamiento de la defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. En efecto, la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación del demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar:

“VIGESIMO QUINTO: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991.”

“VIGÉSIMO SEXTO: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquella en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables.

Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada – basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte



Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso”.

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007, pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sres. Ricardo Gálvez, Adalis Oyarzún, el fiscal subrogante Sr. Carlos Meneses y los abogados integrantes Sres. Fernando Castro y Oscar Herrera.

Afirma que en el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

Señala que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el juez no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y con el mérito de lo expuesto precedentemente se deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

3.- EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL DAÑO Y LA PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN RECLAMADA.

Como primer comentario, indica que en cuanto al daño, lo poco claro del relato de los hechos en la demanda, en elementos relevantes como el tiempo de duración de la detención de cada actora, circunstancias de la misma y consecuencias personales, máxime considerando que las demandantes no se encuentran reconocidas en las nóminas de Detenidos/as Desaparecidos/as, Ejecutados/as Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura reconocidos por el Estado de Chile.

En segundo término, en cuanto a la procedencia de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$200.000.000.- por cada una de las 3 demandantes, señala las siguientes alegaciones:

Fijación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Agrega que, así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.



Expresa que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Señala que tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Indica que ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

Dice que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida de que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, menciona que es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Plantea que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta claramente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.



Agrega que la I. Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudir al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad. En efecto, en la sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891 – 2013 13, la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió:

“Cuarto: Que ante tales argumentos, surge el problema de determinar la real cuantía de dicho daño moral, que como se ha dicho no se puede desconocer, su existencia en el caso, pero si bien, tal actividad se dificulta, por la generalidad de los hechos expuestos en la demandada, sin que se haya precisado cada uno de ellos y la total extensión del perjuicio - lo que permitiría efectuar algún grado de distinción o diferenciación- esta situación no puede ser óbice para alcanzarlo, por lo que se ha de recurrir a la prudencia, la que nunca debe ser desproporcionada, por lo que ésta Corte fijará la cuantía de tal reparación en \$3.000.000 para cada uno de los actores referidos en el considerando vigésimo sexto”.

4.- EN SUBSIDIO, LA REGULACIÓN DEL DAÑO MORAL DEBE GUARDAR ARMONÍA CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR LOS TRIBUNALES.

Hace presente que, en el evento que determine que alguna indemnización se deberá pagar, para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente el monto pecuniario demandado.

5.- IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES E INTERESES.

Además de lo alegado, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Explica que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, indica que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Y la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1º, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, *“En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio.”*

Por consiguiente, el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y condene a mi representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

TERCERO: Que, en el folio 13, la parte demandante evacuó la réplica, solicitando se acoja la demanda.

I. DE LA PRIMERA ALEGACION DEL FISCO:

Expone que en el acápite primero de su presentación, el Fisco Controvierte los hechos señalando lo siguiente:

1.- **CONTROVERSIA DE LOS HECHOS:** Las demandantes no aportan en su demanda antecedente alguno en cuanto su reconocimiento oficial como torturadas o presas políticas por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en la demanda solo se expone el relato que las actoras formulan sobre lo que les habría sucedido y que resume en que habrían sido víctima de detención y aplicación de tormentos por agentes del Estado, es importante tener presente que las demandantes no aparecen reconocidas como víctimas por la Comisión de Verdad y Reconciliación en el Informe Valech, previsto en la ley 19.992, consecuentemente tampoco son beneficiarias de pensión de reparación alguna., este hecho tiene relevancia, porque precisamente las personas que se hubieran sentido afectadas por violencia política podían concurrir a la Comisión Valech de Verdad y Reconciliación para contar su verdad y ser calificados como Víctima de violencia, prisión política y tortura. Sin embargo, las actoras, como hemos dicho, no concurrieron a ninguna Comisión. Además, el procedimiento administrativo de la Comisión Valech fue construido para dar garantías de un reconocimiento estatal masivo, cuestión que las demandantes no cumplen. En consecuencia, esta defensa fiscal controvierte formal, material, sustancial y expresamente los hechos expuestos en la demanda como las consecuencias de derecho que de ellos se seguirán, en los términos dispuestos por el artículo 1698 del Código Civil”.

Señala que tal alegación debe ser desestimada, en por cuanto las actoras si han sido reconocidas por el Estado como víctimas de prisión política, tortura y abusos deshonestos. En efecto, tal como se acreditará en la oportunidad procesal respectiva las actoras figuran como Víctimas de Prisión Política y tortura en los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

registros número 18306, respecto de Parra Millatureo, Nadia Isabel; número 18307, respecto de Parra Millatureo, Rosalba Marina y en el número de registro 18308 respecto de Parra Millatureo Sandra Angélica Por decreto supremo n° 1.040,2 de 26 de septiembre de 2003, el entonces presidente Ricardo Lagos dispuso la creación de esta Comisión, que tendría la calidad de órgano asesor del mandatario. El objeto era suplir las carencias de la Comisión Rettig, que sólo pudo pronunciarse sobre quienes habían muerto a manos de agentes del Estado durante la dictadura militar. Las torturas y prisiones no habían sido contempladas con anterioridad. El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -también conocida como Comisión Valech I-, contiene un desarrollo sobre el origen, mandato, marco jurídico y definiciones relativas a la dignidad, integridad, libertad y seguridad de las personas. También contiene una descripción de la estructura tanto de carácter resolutivo como operativa de la Comisión, refiriéndose a la secuencia de procesos conducentes a recopilar información relativas a la situación de prisión política y tortura, tomar contacto con las víctimas para entrevistarlas y evaluar sus antecedentes para luego precalificarlas o calificarlas. Entre las tareas que la comisión desarrollaba, además de entrevistar a víctimas tanto de la región metropolitana como de otras regiones del país, se encontraban reuniones con expertos/as en materia de derechos humanos tanto del área judicial como del área de salud mental y encuentros e intercambio de información con organismos de derechos humanos. El informe contiene detalle del contexto en que se desarrolla la prisión política y tortura en Chile, así como sus métodos utilizados y consecuencias en las propias víctimas y sus familias a través de definiciones y testimonios; perfil de las mismas y una propuesta de actos reparatorios. Indica que al final del texto se lista una serie de lugares utilizados como centros de detención y tortura. Para mejorar la descarga del documento, se ha dividido en dos archivos; el Informe de la Comisión y la nómina de personas calificadas como víctimas.

Agrega que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como «Comisión Valech», fue un organismo chileno presidido por el monseñor Sergio Valech —de quien toma el nombre— creado para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. El 18 de agosto de 2011 la Comisión presidida por María Luisa Sepúlveda después del fallecimiento, el 24 de noviembre de 2010, de Valech, presentó un segundo informe (Comisión Valech II). El segundo informe reconoció un total de 40.018 víctimas, 3.065 de ellas muertos o desaparecidas.



2.- EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

Dice que por su parte el Fisco alegó la excepción de prescripción extintiva basándose en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, “por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes. Según el relato fáctico de las demandantes, los hechos denunciados, han ocurrido el año 1984. Es del caso que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, 16 mayo 2022 ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la demanda como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita la acción deducida. En subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda que contestó, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil”.

Al respecto indica que esta alegación no es pertinente en cuanto estamos en presencia de violaciones a los derechos humanos, y como ha sido señalado por la robusta jurisprudencia mayoritaria que desde el año 2013 indica que este tipo de causas no prescribe.

Agrega que de manera adicional, se debe tener presente, que el Consejo de Defensa del Estado es el órgano que defiende los intereses del Estado. Y en dicho contexto, es el demandado por excelencia en esta materia. Por lo que, pese a que conoce o debe conocer por la cantidad de demandas e indemnizaciones conferidas en esta materia a los diversos presos políticos, sigue negando hasta la fecha la viabilidad de la acción.

Señala que en esta materia, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas en fallo de fecha 14 de octubre de 2020, de causa 35-2020, ha resuelto lo siguiente: *“Que, previo a emitir un pronunciamiento sobre la cuestión apelada se hace necesario hacer mención a algunos instrumentos internacionales que rigen al efecto:*

PROMULGA LA CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS Y SU ANEXO, SUSCRITA POR EL GOBIERNO DE CHILE EN VIENA, EL 23 DE MAYO DE 1969 N° 381



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

ARTÍCULO 26: Pacta sunt servanda: Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. ARTÍCULO 27 El derecho interno y la observancia de los tratados: Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

PROMULGA LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS MEDIANTE RESOLUCION 39/46, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 1984 N° 808

Artículo 14:

1. Todo Estado Parte velará para que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura, la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.

APRUEBA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DENOMINADA "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" N° 873

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

Artículo 25. Protección Judicial

1. *Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, XTXVHERWVM la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*

2. *Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.*

CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DEBIDO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA, 1949

Artículo 131 - III. Responsabilidades de las Partes Contratantes: “Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior.”

Señala que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción - por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado. (...)”. E inclusive “(...) más allá de lo razonado por los jueces ad quem, reiterada jurisprudencia de esta Corte precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En



esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Dic que }dicho de otro modo, la jurisprudencia se ha hecho cargo en torno a la normativa internacional en reparar íntegramente el daño rechazando la prescripción conforme a “(...) Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de mediató la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio. (...) También se señala que “(...)cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Entonces, pretender aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente. (...)”. De otro modo, un sistema coherente es que declara que no prescribe los delitos de lesa humanidad y las acciones de reparación originadas por dichos delitos. Entonces, aclarado que las normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos prima por sobre el derecho común, nos encontramos ante “(...) un deber de actuación a los Poderes Públicos, y en especial al Jurisdiccional local, en tanto los tribunales no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin uso las del derecho internacional que reconocen el acceso ineludible a la reparación, ya que ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por eso mismo no resultan adaptables a estos efectos las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como lo alega el recurso, desde que contradicen la normativa internacional sobre derechos humanos, de superior jerarquía. (...)

Aclara que aquí no se ha creado un derecho mediante esta supremacía de la normativa internacional en donde se entiende que las normas del derecho común no son aplicables frente a acciones de indemnización de presos políticos. Sino que se ha reconocido un sistema que siempre ha existido. Por ello podemos concluir, que el argumento de prescripción citado por el Fisco de Chile, está con creces superado, especialmente si el sustento de la contraria implica excepcionalmente fallos del 2014, siendo en su mayoría del 2013 hacia atrás en donde se aplicaba esa postura por la Excelentísima Corte Suprema.

3. EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL DAÑO Y LA PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN RECLAMADA.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

Expresa que el Fisco señala: “Como primer comentario, indicar en cuanto al daño, lo poco claro del relato de los hechos en la demanda, en elementos relevantes como el tiempo de duración de la detención de cada actora, circunstancias de la misma y consecuencias personales, máxime considerando que las demandantes no se encuentran reconocidas en las nóminas de Detenidos/as Desaparecidos/as, Ejecutados/as Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura reconocidos por el Estado de Chile.”

Al respecto, dice que como ya se ha señalado con anterioridad en la misma presentación tal alegación debe ser desestimada, por cuanto las actoras si han sido reconocidas por el Estado como víctimas de prisión política, tortura y abusos deshonestos. En efecto, tal como se acreditará en la oportunidad procesal respectiva las actoras figuran como Víctimas de Prisión Política y tortura en los registros número 18306, respecto de Parra Millatureo, Nadia Isabel; número 18307, respecto de Parra Millatureo, Rosalba Marina y en el número de registro 18308 respecto de Parra Millatureo Sandra Angélica. Por su parte el mayor o menor tiempo en el que él haya estado privado de libertad no constituye un único elemento para medir los daños psicológicos cuando fue sometido a torturas y por tanto el mero tiempo no debe ser el único elemento para evaluar el monto del daño moral asociado, en tanto las torturas a las que fue sometido en sí mismas como en las secuelas y la estigmatización social que implicó, no bastando así las meras concesiones voluntarias pecuniarias que podría ofrecer el Estado a modo de reparación y no siendo tales concesiones óbice para implicar una imposibilidad de acudir a la justicia para la justa reparación que estimamos en \$200.000.000 de pesos por daño moral asociado al daño sufrido.

En cuanto a las alegaciones del Fisco en atención a la procedencia de la Indemnización reclamada:

Estima que es pertinente en este punto hacer mención a la llamada *“Teoría de los actos Propios”*, que en palabras de La Excm. Corte Suprema en causa ROL N° 7.9622015 la define como: *“principio general del derecho fundado en la necesidad de respetar y reconocer los efectos de las situaciones jurídicas creadas y asumidas por el mismo sujeto que después las reclama.”*

Agrega que en palabras del profesor don Luis Díez-Picazo Ponce de León, *“La persona que adopta y observa, dentro de una determinada situación jurídica, una cierta conducta relevante y eficaz, que objetivamente debe ser valorada como un anuncio o signo de que un derecho subjetivo o una facultad no será ejercitada o lo será sólo dentro de unos ciertos límites, el principio general de la buena fe le impone un deber de coherencia de su comportamiento y, como consecuencia de ello, cuando esa misma persona intenta ejercitar un derecho subjetivo incompatible o contradictorio con su conducta anterior, la pretensión ulterior se torna plenamente inadmisibile”*.



Menciona que en esta dirección es sabido que nuestro sistema normativo no establece una regulación específica en relación con la doctrina de los actos propios, la cual, sin embargo, ha adquirido amplia acogida en la doctrina de los autores nacionales y en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En concordancia con lo anterior, precisa que incluso el mismo Consejo de Defensa que en virtud de una transacción que se produce en los autos sobre indemnización de perjuicios caratulados “GUELET / FISCO DE CHILE”, causa rol IC N° 244- 2019, el que de manera voluntaria señala lo siguiente: *“que se pagará a cada uno de los actores que se individualizan en la cláusula siguiente, la suma única y total de \$90.000.000.-, soportando cada parte sus costas.”*

Por tanto, malamente podría ahora alegar que las indemnizaciones reclamadas son excesivas, en circunstancias de que es el mismo Fisco, que de mutuo propio ha accedido a indemnizaciones de gran valor, sin considerar que dichas cantidades eran excesivas.

Dice que en el mismo sentido existen diversos fallos en los que se ha fallado en contra del Fisco:

1. Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017 del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, caratulada “Provoste con Fisco de Chile” rol C-682-2016, en la que se condena al Estado de Chile al pago por concepto de indemnización por daño moral las siguientes sumas de dinero: 1.- A don JAIME PROVOSTE CÁRDENAS la suma de \$160.000.000.-.

2.- A don PEDRO ANTONIO TORRES VILLARROEL la suma de \$160.000.000.- 2. Sentencia de fecha 25 de Junio de 2018, del 18° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Concha con Fisco de Chile”, rol C-20669-2016, en la que se condena al Estado de Chile por concepto de Indemnización por daño moral al pago de \$110.000.000 por cada uno de los demandantes.

3. Sentencia de fecha 03 de Septiembre de 2018, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, bajo el rol N°264-2018, caratulada “CORTES con FISCO DE CHILE”, en la que se condena al Fisco de Chile, en donde demandan tanto hijos y hermanos por la muerte de los presos políticos que se identifican, obteniendo sumas entre \$40.000.000 y \$100.000.000 por el grado respecto de aquel, Montos que se ratificaron ante el rechazo de la casación en el fondo interpuesta por el Fisco, en causa Rol N° 29.251-2018 de la Excelentísima Corte Suprema.

4. Causa Valencia con Fisco de Chile del 18° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° 8032008, se acogió respecto de cada preso político la suma de \$150.000.000. Monto que no sufrió alteraciones tras ser conocido por la Excelentísima Corte Suprema bajo el Rol N° 1092-2015.

Sin embargo, si bien es cierto que el daño moral debe ser acreditado, debe tenerse presente que no puede existir duda que las víctimas de violaciones de derechos fundamentales, en particular los actores, que fueron reclusos ilegalmente en



una isla del fin del mundo; que sufrieron maltratos y que vivieron en aquel período la agonía de la incertidumbre de su propia existencia, sufrieron un inconmensurable daño moral, que no requiere ser probado pues el más elemental sentido común basta para tal efecto.(...)” . Para ello, debemos afrontar la causa con perspectiva objetiva, es decir, no se trata de una simple lesión. O de insultos que sufrieron los presos políticos, entre ellos mi patrocinado. Sino que hablamos de casos de torturas, en donde su calidad de humano fue desvirtuada a niveles inimaginables. No en una época de guerra, sino que por parte del mismo Estado protector, que por sus agentes efectuó bajo un manto de impunidad. No se debe olvidar, que la tortura es un tipo de daño permanente en lo más profundo del alma. El fin de la indemnización es la reparación integral del daño, lo que se encuentra en el artículo 2329 del Código Civil que dice “(...) “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta (...)” es decir, todo daño debe ser indemnizado. Especialmente por parte del Estado que actuó por medio de sus agentes. Además este principio de “(...) la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado. (...)”

Además, la sentencia reciente de Provoste con Fisco de Chile, se hizo cargo del argumento citado por el Fisco, señalando en su considerando Octavo “(...)Que en cuanto a la alegación efectuada por el Fisco, para el evento que se desechen las alegaciones referidas en los motivos que preceden, consistente en que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales, será desestimada considerando para ello que conforme a lo señalado en el motivo séptimo los beneficios otorgados a las víctimas de delitos de lesa humanidad constituyen modalidades distintas de compensación que asume voluntariamente el Estado no pudiendo sostenerse que abarca la reparación del daño moral que se hace valer en la presente causa. Por otra parte, la determinación del monto de las indemnizaciones se establecerá prudencialmente por este sentenciador atendiendo a la magnitud de los daños sufrido por cada uno de los actores. (...)” . Es decir, el Tribunal prudencialmente fijará la indemnización por este tipo de indemnización.

4. ARGUMENTACIONES ADICIONALES DE LA DEMANDANTE:

Indica que la indemnización que se establezca, para ser considerada una reparación completa de acuerdo al daño que han sufrido las actoras, quienes han sido víctimas de prisión política, abusos deshonestos, y tortura y de persecución política luego de recuperar su libertad, debe de ser completa e integral. Así pues afirma que



erróneamente el fisco ha pretendido imputar al ITEM indemnización acciones que el Estado ha efectuado en el plan de Reparación Integral, imputación que no corresponde de acuerdo a la Jurisprudencia de la Exclentísima Corte Suprema y de la Excma. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Expresa que la Reparación Integral desde los estándares del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos ha tenido una evolución significativa trascendiendo desde una reparación indemnizatoria a una reparación integral en la que se agrega como paradigma el proyecto de vida digna.

Dice que en lo que se puede identificar como elementos de la reparación integral, misma puede presentarse bajo las siguientes formas: 1) la restitución; 2) la indemnización; 3) Proyecto de vida; 4) la satisfacción y las garantías de no repetición.

Agrega que el derecho a la reparación integral, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se construye a partir de los tratados internacionales, de las resoluciones de órganos de protección y garantía de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), tanto en sus opiniones consultivas como en los fallos proferidos como consecuencia de los casos contenciosos presentados por la Comisión.

De acuerdo con ese panorama, es tal el marco teórico y normativo del derecho a la reparación integral en el plano de la jurisprudencia de la Corte IDH. De manera preliminar se deben observar los principales instrumentos internacionales del sistema universal de protección de derechos humanos que contienen disposiciones acerca del derecho a la reparación integral.

Refiere que la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha realizado ingentes esfuerzos para explicar, ampliar, reforzar y enmarcar las consecuencias, conceptualizaciones y determinaciones de la obligación de los Estados a reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones del Derecho internacional de los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario. 6. La Corte IDH, en su jurisprudencia, ha señalado que: Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial.

Esta definición es coherente con la base legal en la materia, esto es el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá si ello procede, que se reparen el daño y las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”



Así, la Corte Permanente de Justicia Internacional lo sostenía ya en el fallo de la Fábrica de Chorzów en el año 1928, posteriormente pasaría a ser utilizado por la Corte Internacional de Justicia en fallos como “Reparaciones por los daños sufridos por el servicio de Naciones Unidas”, criterios que finalmente adoptaría la Corte IDH en sus primeras sentencias, para luego hacerlos suyos y utilizarlo en jurisprudencia. Fallo de la CPJI en el Caso de la Fábrica de Chorzow (Demanda de Indemnización), (Alemania vs Polonia) (1928) 8. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam Sentencia de 10 de septiembre de 1993 señala La forma en la que una violación a los derechos humanos puede incidir y afectar la historia personal de la víctima y su entorno presenta un alto nivel de complejidad, la misma Corte IDH, en su sentencia sobre reparaciones del caso Aloeboetoe vs. Suriname señaló que: “Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas”. Hay aforismo en latín que dice en este sentido: causa causæ est 42 causa causati. Quiere decir que todo causa un efecto. . Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos 9. El estudio de van Boven 1993 Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial. Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8 señala que “Lo ideal es que en respuesta al daño, se dé el restablecimiento de las cosas al estado anterior al daño, pero hasta la Corte reconoce que en muchos casos la restitución o reparación integral es imposible, por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria.

La finalidad de esta indemnización es constituir una sanción por una conducta imputable al Estado y así trata de reparar sus consecuencias, generalmente incluye el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante”

La principal característica en la determinación de las indemnizaciones en dinero en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte IDH es que es este organismo el que determina el monto y modalidad de pago; y se ha confundido el concepto de reparaciones con el de indemnizaciones, así pues las pensiones, becas u otras prestación son partes de la reparación integral pero no constituyen una indemnización y por ende estos montos no pueden imputarse recíprocamente

Indica que la reparación integral requiere de Cuatro acciones: a.- Rehabilitación: Atención médica, psicológica, Servicios jurídicos, Servicios sociales. b.- Compensación: Indemnización de todos los perjuicios económicamente evaluables, que sean consecuencia de las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. C.-Medidas de satisfacción: Buscan que cesen las violaciones de los derechos humanos, que se garantice el restablecimiento del buen nombre y la dignidad de las víctimas y garantías de no repetición de los crímenes; y D.- Garantías de no repetición: suponen medidas de alcance político y social encaminadas a



transformar las leyes, relaciones e instituciones en una sociedad democratizándola. La Excm. Corte Suprema de Justicia ha expresado que la incompatibilidad alegada entre los beneficios que da la ley 19123 y 19234 no existe, desde que el Estado tiene un régimen de pensiones asistenciales y otros beneficios reparatorios, sin acreditarse que éstas tiene por objeto satisfacer la merma moral que invocan los demandantes, criterio jurisprudencial prevaleciente actualmente a nivel interno, acerca del carácter complementario y no excluyente de reparaciones otorgadas en vías administrativa y judicial, es razonable en relación con el derecho de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia para solicitar una declaratoria judicial de responsabilidad estatal, ya sea para que se efectúe una determinación individual de daños o, en su caso, para cuestionar la suficiencia o efectividad de reparaciones recibidas con anterioridad, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace presente que en la causa Rol 13.762-2016, de 16 de abril de 2017, que señala en su considerando Décimo Cuarto: "...que estas mismas reflexiones impiden admitir la alegación del Fisco de Chile, en orden a declarar improcedente la indemnización demandada por la actora Mónica Contreras Hidalgo, en razón de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley N° 19.123, pues esa pretensión resulta inconciliable con la normativa internacional antes señalada y porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no la contradice, como también se razonó, de suerte que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas en función de otras imposiciones legales de derecho patrio. La preceptiva invocada por el Fisco-que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, porque se trata de forma distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, sin que implique la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley..." Así también se pronunció, en otro fallo, dictado 26 de abril de 2017, Rol N° 11.767-2017, en su considerando Undécimo: "...Que estas mismas reflexiones impiden aceptar la alegación del Fisco de Chile, de declarar improcedente la indemnización que se ha demandado en razón de que los actores obtuvieron pensiones de reparación de conformidad a la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, pues esa pretensión contradice lo dispuesto en la normativa internacional señalada y porque el derecho común interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, como también se razonó, de modo que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas en función de otros



preceptos de derecho patrio. La reglamentación invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales – no contempla incompatibilidad con las indemnizaciones que se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación antes señalada, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley...” También se debe esgrimir, que el sistema de responsabilidad del Estado, deriva además del artículo 3° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad...”

Dice que a mayor abundamiento en el Fallo de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 09 de diciembre de 2019 Rol N°16.950- 19.”Segundo: Que como se desprende de autos, son hechos indiscutidos que la demandante sufrió por parte de agentes del Estado, secuestro, torturas, vejámenes, permanencia obligada en recintos carcelarios sin justificación, entre otros actos, que implican delitos de lesa humanidad, todo lo que evidentemente le dejó trastornos mentales, como los descritos por su psicóloga Pamela Morales Quintana, quien la atendió y diagnosticó “episodio depresivo moderado y trastorno por estrés postraumático” Digno es señalar que con fecha 14 de agosto de 2020 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió en la causa rol 35-2020 lo siguiente: “I. Que, se REVOCA la sentencia apelada el 10 de enero de 2020, por medio de la cual se rechazó la demanda en todas sus partes, sin costas, por haber tenido el actor motivo plausible para litigar, y en su lugar se declara: A. Que se rechazan las excepciones de reparación satisfactiva, como también la subsidiaria de prescripción extintiva y la de compensación interpuestas por el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado. B. Que, se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida en folio 1, por Pablo Ignacio Harambour Castillo en representación de Luis Antonio Vargas Bravo condenándose al demandado Fisco de Chile, a título de indemnización de perjuicios por daño moral irrogado al actor a pagar al demandante la suma de \$100.000.000.- de pesos. II.- La suma antes indicada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada y la de su pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero que se generen en el mismo período. III.- Que se condena en costas al demandado por haber resultado totalmente vencido”

CUARTO: Que, en el folio 15, la parte demandada evacuó la réplica, señalando al efecto que reproduce íntegramente y ratifica en su totalidad el escrito de



contestación de la demanda, por lo que se reiteran todas y cada una de las alegaciones, excepciones y defensas contenidas en dicho escrito.

QUINTO: Que para acreditar su pretensión la parte demandante rindió la siguiente prueba:

Documental: Que, en el folio 24, acompañó: 1.- Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017, en causa Rol N° C-682-2016, caratulada “Provoste con Fisco de Chile”, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas. Documento con firma electrónica avanzada; 2.- Sentencia de fecha 25 de junio de 2018, en causa Rol N° C-20669-2016, caratulada “Concha con Fisco de Chile”, del 18° Juzgado Civil de Santiago. Documento con firma electrónica avanzada; 3.- Sentencia de fecha 03 de septiembre de 2018, en causa Libro Civil N° 264- 2018, caratulada “Cortes con Fisco de Chile”, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. Documento con firma electrónica avanzada; 4.- Sentencia de fecha 25 de febrero de 2019, en causa Rol N° 29251-2018, caratulada “Cortes con Fisco de Chile”, dictada por la Excelentísima Corte Suprema. Documento con firma electrónica avanzada; 5.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2020, en causa rol civil N° 244 - 2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, caratulada “Guelet con Fisco de Chile”. En la que se aprueba avenimiento entre parte de los demandantes y el Fisco de Chile. Documento con firma electrónica avanzada; 6.- Sentencia de reemplazo fecha 06 de diciembre de 2019, dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa caratulada “Torres Gaona Guillermo con Fisco de Chile”, bajo el Rol Civil N° 18.179-2019. Documento con firma electrónica avanzada; 7.- Sentencia de fecha 14 de octubre de 2020, en causa Libro Civil N° 35-2020, caratulada “Vargas con Consejo de Defensa del Estado/Fisco de Chile”, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Documento con firma electrónica avanzada.

Que, en el folio 27, acompañó: 1.- Informe Psicológico de daño asociado a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, respecto de don Sandra Parra Millatureo, firmada por la psicóloga del Programa PRAIS Magallanes, doña Romina Valentina Yáñez Vásquez; 2.- Informe Psicológico de daño asociado a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, respecto de don Rosalba Parra Millatureo, firmada por la psicóloga del Programa PRAIS Magallanes, doña Romina Valentina Yáñez Vásquez; 3.- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de doña Romina Valentina Yáñez Vásquez, inscrita bajo el N° 673918, emitido con fecha 09 de noviembre de 2022, firmado electrónicamente por doña Carmen Monsalve Benavides, Intendente de Prestadores de Salud, Superintendencia de Salud; 4.- Copia simple de la Nómina de Personas Reconocidas como víctimas, al 28 de Noviembre de 2004, Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura (Que es parte integral de la comisión Valech I), descargada desde



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

el sitio web <https://pdh.minjusticia.gob.cl/wpcontent/uploads/2015/12/Comision-N-PPyT.pdf>.

Que, en el folio 28, acompañó: 1.- Copia simple de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, volumen I, tomo 1, emitido por la Corporación nacional de Reparación y reconciliación (mejor conocido como informe de Rettig). Descargado desde el sitio web <https://pdh.minjusticia.gob.cl/wpcontent/uploads/2015/12/tomo1.pdf>; 2.-Copia simple de sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015, en causa Rol N° 1092-2015, caratulada “Valencia y Otros con Fisco de Chile”, dictada por la Excelentísima Corte Suprema; 3.- Copia simple de transacción celebrada por el Consejo de Defensa del Estado y el abogado Oscar Gibbons Munizaga, en causa Rol N° 244-2019, caratulada “GUELET con FISCO DE CHILE”, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Que, en el folio 29, acompañó: 1.- Copia simple del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, (mejor conocido como comisión Valech I), descargado desde el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, <https://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf>, desde las páginas 1 a la 166; 2. Copia simple del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, (mejor conocido como comisión Valech I), descargado desde el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, <https://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf>, desde las páginas 167 a la 638.

Que, en el folio 30, acompañó: 1.- Nota Diario La Prensa Austral del 20 de marzo de 1984 página 13: “A la justicia militar detenidos por atentados”; 2.- Nota Diario La Prensa Austral 20 de marzo de 1984 página 5: “Espero que recobren la libertad y se haga justicia con ellos”; 3.- Portada Diario La Prensa Austral del 28 de marzo de 1984: “Saldo de la Protesta 75 detenidos 6 carabineros heridos, en el norte 4 muertos”; 4.- Portada del Diario La Prensa Austral de fecha 30 de marzo de 1984 “Nomina de 88 detenidos este martes”; 5.- Nota del Diario La Prensa Austral de fecha 30 de marzo de 1984: “Siguen presos 88 de los 90 detenidos”; 6.- Nota del Diario La Prensa Austral de fecha 30 de marzo de 1984 ampliado: “Siguen presos 88 de los 90 detenidos”; 7.- Nota Diario La Prensa Austral 02 de Abril de 1984 página 7: “Hoy debe definirse situación procesal de 88 detenidos”; 8.- Nota Diario La Prensa Austral 02 de Abril de 1984 página 7 ampliado: “Hoy debe definirse situación procesal de 88 detenidos”; 9.- Portada Diario La Prensa Austral 03 de abril de 1984 “Libres Ruiz y Mladinic”; 10.- Nota Diario La Prensa Austral 03 de abril de 1984 página 8: “Del total de reos del 27 Fiscal Militar resolvió: en libertad 62 y reos 25”; 11.- Nota Diario La Prensa Austral 11 de Abril de 1984 : “Apelan a la Corte Marcial reos por disturbios del 27”; 12.- Nota Diario La Prensa Austral 14 de abril de 1984 página 9: “Fiscal Militar negó libertad bajo fianza para protestantes”; 13.- Nota



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVVYXX

Diario La Prensa Austral 17 de abril de 1984 página 7: “Otorgada Excarcelación para protestante detenido el 27”; 14.- Nota Diario La Prensa Austral 18 de abril de 1984 página 5: “Por cuarta vez pidieron su libertad protestantes presos”; 15.- Nota del diario la Prensa Austral de fecha 19 de Abril de 1984 página 5: “Libres 19 protestantes por Resolución de Fiscal Militar”; 16.- Nota del diario la Prensa Austral de fecha 24 de abril de 1984 página 6: “Confirman encargatoria de Reo para 25 protestantes”.

Testimonial:

Que, en el folio 57, rindió la de don **Ricardo Vicente Osorio Costa** quien en cuando a los hechos de la demanda indica que conoce a las hermanas Parra, las conoció en el Programa de Reparación impartido por el gobierno, como una forma de reparación, esto estaba la Universidad UNIAC, en la ciudad de Punta Arenas, como el año 2004, más o menos, estudiando distintas materias, sicología, marketing y otras materias, estudiaban de lunes a sábados. Conoce a dos de las hermanas, Sandra y Nadia, después supo de una tercera, pero no la conoció al principio, pero después la conoció también. Dice que después de unos días de conocerse, en un recreo, comenzaron a conversar y a conocerse más, y ahí se contaron en donde fueron detenidos, y lo que les pasó cuando estuvieron detenidos. Expresa que le conversaban que cuando ellas fueron detenidas, las maltrataron mucho, las insultaban, las agredían, les tiraban agua, no las dejaban ir al baño, les quitaban la comida, las golpeaban y las tocaban. Después de ahí le contaron que su hermana mayor, que estaba con ellas, cuando estuvieron detenidas las protegía de posibles abusos hacia ellas, las otras internas que estaban en el recinto las humillaban y las hacían trabajar, si no lo hacían tendrían que pagarles con cigarrillos y otras cosas que compraban en un kiosco que había en el recinto. Siempre le decían que cuando ya pasó casi toda la pesadilla, cuando salen libres, quedaron con temor de que las volvieran a detener, y hacerlas desaparecer, como en un instante se los habían dicho. Porque después de las detenciones había vehículos, que eran del Servicio de inteligencia del Ejército, que seguían a todas las personas. Y casi siempre conversaban, le decía que en las noches se despertaban y sentían como que las iban a ir a buscar. Eso es todo más o menos lo que conversaban; agrega que los maltratos, insultos, agresiones y demás hechos que señala provenían de los militares y carabineros que las detuvieron; señala que las actoras estuvieron detenidas se supone, que en la Cárcel Pública, la ex Cárcel, supone pues ellas no le dijeron el lugar en que estuvieron detenidas, porque el testigo también fue detenido y lo llevaron a la Cárcel. Al Pudeto los llevaban a declarar; afirma que una de las hermanas le contó que la hermana mayor fue abusada por agentes del Estado; indica que en el tiempo posterior a la detención, las actoras fueron perseguidas por agentes del Estado en vehículos; dice que la vida de las actoras sufrieron daños emocionales especialmente. Eso es lo que le decían ellas. Timidez, temor de que las vuelvan a buscar; aclara que de las actoras conoce a la



Sandra y a la Nadia, a la otra no la conoce; explica que los actos de persecución por parte de agentes del Estado consistían en que las seguían los vehículos de los agentes del Estado, ello le consta porque ellas se lo contaban, a él se lo contaron ellas, no lo vio;

Que, en el mismo folio, rindió la de don **Fernando Eloy Barboza Williams**, quien señala que conoce a las actrices de antes de que caigan, iban a fiestas y se juntaban a veces en el centro, y después se encontraban cuando cayeron, cuando estuvieron detenidos; en cuanto a los daños sufridos por las actrices afirma que los maltrataron a ellos /las demandante y el testigo), les tiraban agua, les pegaban, y todo eso. Ahí en ese momento no los dejaban ir al baño, ni les daban agua ni comida. De ahí a las chicas, refiriéndose a las tres, las manoseaban, y después cuando pasaron a la cárcel, a las tres chicas, las tenían de sirvientas, tenían que hacer aseo, hacer la comida, y si no lo hacían las amenazaban con que tenían que darles cigarros o cosas de alimentos. Abusaban, pero ya no tenía contacto con ellas, pues hay cárcel de mujeres y cárcel de hombres; dice que conoce de los hechos materia del juicio porque lo escuchó, estaban separados por una pared, pero escuchaba todo lo que le hicieron a las chicas, eso fue cuando estuvieron en Carabineros, ya en la cárcel no tenían para hablar; consultado el testigo si fue detenido junto a las actrices, dice que sí, cayeron juntos; comenta que estuvieron detenidos donde los Carabineros, y de ahí a la cárcel; indica que estuvieron dos días detenidos en Carabineros, y en la cárcel estuvieron cinco días; afirma que durante la detención de las actrices, estas fueron víctimas de maltratos, en el calabozo las tenían sin agua ni comida, las trataban mal, las manoseaban, les tiraban agua; aclara que los malos tratos provenían de Carabineros; agrega que alguna de las demandantes, fue víctima de abuso sexual durante la detención, los Carabineros siempre las molestaban, se escuchaba todo a través de la pared, les pegaban y las chicas gritaban igual. No lo vio, porque no podía ver, estaban los calabozos juntos, pero después cuando se encontraron y estaban libres, le contaron lo que les habían hecho, a una le rompieron la boca, le ponían bolsas encima de la cabeza; consultado si sabe si alguna de las actrices fue víctima de violación, dice que parece que sí, pero a él no le han contado mucho. Todo esto fue en marzo del año 1984; en cuanto a los daños sufridos por las demandantes, producto de lo ocurrido, indica que, asustadas, con miedo, más lo que tenían más miedo, cuando iban a trabajar, las andaban siguiendo, en el centro también, no las dejaban tranquilas; no sabe si ese miedo se mantiene hasta el día de hoy, porque después no las vio más, la última vez que las vio, estaban en la feria trabajando, e igual andaban asustadas.

Que, en el folio 87, rindió la de doña **Romina Valentina Yáñez Vásquez**, quien indica que es funcionaria del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS, se desempeña como psicóloga, atiende pacientes que no forman parte de lo que son informes de daños, se les realiza psicoterapia, y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

por otra parte, se dedica a las evaluaciones de daños; indica que es efectivo que las evaluadas (demandantes) pertenecen al programa PRAIS, y también a la Comisión Valech como víctimas de prisión política y tortura; exhibiéndoles los informes PRAIS de las actoras, reconoce los tres informes y su firma, señala que los tres son sus informes, ellos los hizo y los firmó. Reconoce su firma en los tres y los ratifica; en cuanto a los daños indica que el primer caso, es de la señora Rosalba Parra, quien es la hermana mayor, y en el periodo de 1973, fue víctima también de un evento de violencia, por parte de Carabineros. Ella se encontraba en el centro de la ciudad, ya que su mamá le había pedido unos encargos. En ese momento, ella se encontraba en una micro, cuando llegan repentinamente Carabineros y militares, por todos lados, y a ella la sacan a la fuerza de la micro, ejerciendo violencia física tales como empujones, tirones de brazos y golpes de patadas. Después de eso, según lo que relata la señora Rosalba, comenzaron a detener a un montón de personas, y a ella igual se la iban a llevar detenida, sin embargo después de hacer mucho forcejeo con el Carabinero que la estaba tironeando, logró escapar. Otro acontecimiento dentro del periodo de 1973 en adelante, de acuerdo a lo que recuerda ella, es que sufrió allanamiento en su hogar, donde comenzaron a dar vuelta todas las cosas, los sillones, las camas, y entre otras cosas lo que vivió con mucho miedo y ansiedad; agrega que, el segundo caso, es de la señora Sandra Parra, quien tiene pocos recuerdos de ese periodo, porque era mucho más chica, pero también recuerda que su casa fue allanada, recuerda haber visto a sus padres ocultar un calendario de Allende debajo de un sillón, y que también enterraron algunos libros; el tercer caso, señala es de la señora Nadia Parra, también recuerda haber sido allanada en ese periodo en su casa, y claro, lo que recuerda es un episodio muy violento, donde se sintió muy vulnerada, siendo ella la menor de las hermanas. Eso por parte del periodo de 1973, más o menos. Dentro del contexto del año 1984, en el caso de la señora Rosalba, ella tenía alrededor de 20 años, según comentó. Ella trabajaba como asesora de hogar, como niñera, y se encontraba cuidando a dos niños en una casa que estaba por Lautaro Navarro, y trabajaba desde alrededor de las 7.00 horas, hasta las 19.00 horas, al momento de terminar su trabajo, va al sector de Colón con Chiloé, a tomar locomoción para irse a su casa. Comenta de que es ahí cuando viene un grupo grande de militares y Carabineros, y también había un bus donde estaban metiendo personas, y ahí la atrapan a ella y es detenida. Comenta que en ese transcurso de su detención, le pegaron, la empujaban, y fue ingresada al bus a la fuerza. También comenta, que mientras estaba siendo tironeada por un militar, en ese momento sus hermanas se encontraban saliendo del colegio, y justo percibieron esto, así que fueron a ayudarla, pero igual fueron detenidas, aun siendo menores de edad, luego de esto, fueron llevadas a la comisaría, que estaba en Waldo Seguel, y en ese momento, cuando fueron bajadas del bus, nuevamente sufrieron apremios físicos, tales como golpes, culatazos, empujones y maltrato psicológico con verbalizaciones denigrantes



hacia ellas. De ahí, fueron llevadas a una especie de calabozo, donde inmediatamente fueron manguereadas con agua fría y con la ropa puesta, dejando también el agua hasta su talón. Comenta que las condiciones también, del calabozo eran súper malas, no tenían luz, no tenían ventilación, olía mal, hacía frío, estaban hacinadas y tenían que hacer sus necesidades ahí mismo. Luego, en varias ocasiones fueron sacadas para interrogarlas, de lo que recuerda la señora Rosalba, es que la llevaron por un pasillo hasta llegar a una sala, donde le pusieron una arpillera en su cabeza, para privarla de visión. En ese momento fueron formadas en fila, para ser maltratadas nuevamente, con apremios físicos y sobretodo amenazadas de muerte y de tortura. Dice que es aquí también, donde sucede un acontecimiento bien fuerte para ella, ya que varios militares comenzaron a tocarla alrededor de su cuerpo, en ese momento la evaluada, la señora Rosalba, se puso a llorar en la entrevista con la testigo, comenta que le tocaron su vagina, sus pechos y sus glúteos, y esto también a sus hermanas que eran menores de edad, dentro de esa situación de interrogatorio, la señora Rosalba, comenta de que le hicieron un puntapié y ella cayó bruscamente en un esquinero, haciéndose una herida en la parte superior de la ceja; cicatriz que tiene hasta los días de hoy. Luego fueron llevadas a la celda a la Cárcel, donde ahí comenta que los tratos que tuvieron fueron mejores, ahí ya no recibió apremios físicos ni psicológicos. El tiempo que ella estima que estuvo detenida, fue de alrededor de seis días, pero ella lo percibió como si fuera un mes entero.

Por parte de la señora Sandra, relata que ella comenta que cuando fueron ingresadas a la celda, fueron manguereadas dos veces, con la ropa puesta y todo, quedándose con la ropa mojada todo el tiempo en que estuvieron en el calabozo. Agrega que ella comentó que había más personas detenidas en ese calabozo, donde había borrachos y por lo general mujeres. En el momento en que fueron interrogadas, en el trayecto, pudo ser testigo de que vio una fila de hombres apoyando sus manos contra la pared, que estaban con su pantalón y ropa interior abajo, con sus muslos completamente ensangrentados, situación que también es bastante fuerte para que la observe una adolescente. Después de ser trasladados a la cárcel, ahí lo malos tratos cesaron. También hace alusión de que fue abusada sexualmente, cuando estaba en el interrogatorio. Por parte de la señora Nadia, refiere que ella tiene muy escasos recuerdos de lo que sucedió en ese periodo, pero sí recuerda que fueron manguereadas dos veces, y también que en el periodo del interrogatorio, tiene recuerdos muy borrosos sobre que fue abusada sexualmente. Eso por parte de la señora Nadia, que tenía escasos recuerdos.

En cuanto a los daños que han tenido las actrices, producto de haber sido víctimas de prisión política y tortura, expresa que de acuerdo a lo que se evaluó, se realizó un informe, utilizando obviamente las herramientas adecuadas para esta evaluación, se percibió que en el caso de la señora Rosalba Parra, el daño fue a nivel personal y familiar, como consecuencia desarrolló un trastorno de consumo de



alcohol y un trastorno depresivo, la evaluada comenta que después de ser liberada, se casó con quien era en ese tiempo su primo, con el fin de salir rápido de su casa, porque era un ambiente disfuncional y de ahí comenzó a tener nuevamente episodios de violencia intrafamiliar con su pareja. Comenta que también durante mucho tiempo se mantuvo disociada de la realidad, producto de todo lo que le estaba pasando; estaba funcionando de manera automática. Dejó de lado a sus hijos, siendo negligente en los cuidados de ellos, no los aseaba, los enviaba sucios al colegio, y en varias ocasiones su hija fue llevada de vuelta a la casa, producto de este problema. Otro episodio que ella comenta, y que lo dice con mucha tristeza, es que como cayó en el alcoholismo, ella dejaba encargado a su hijo menor con un vecino, después de varios años, se enteró de que su hijo había sido abusado por aquel, justo cuando ella estaba bajo los efectos del alcohol no pudo hacer nada. Por parte de ella misma la detención le afectó en su autoestima, en la forma de relacionarse con los demás, volviéndose más evitativa, más introvertida, teniendo como una percepción errónea de sí misma, creyéndose incapaz de lograr sus metas. Explica que se ve de una forma insuficiente, el daño fue más psicológico. Y como conclusión, señala que se diagnosticó un trastorno de estrés postraumático, debido a los síntomas que tiene actualmente, ya que demuestra un rechazo hacia las figuras de Carabineros y militares, donde cada vez que los ve, tiene una crisis de pánico, y esto se acrecentó en lo que fue el “estallido social”. Actualmente, según lo que ella comenta, pudo superar su alcoholismo, hace varios años, cuando se enteró de que su hijo fue abusado. Además, ella se mantuvo mucho tiempo sin salir de su casa, una vez que fue liberada.

Por parte de la señora Sandra, las consecuencias que tuvo, fueron a nivel relacional con los demás, volviéndose cada vez más introvertida. Después de ser liberada, comenta que, estuvo alrededor de un mes sin salir de su casa, y eso le ocasionó también un problema de adaptación en el colegio, cuando retomó. Y a lo largo de los años, no pudo completar su enseñanza, pues desertó. También por el lado laboral, ella trabaja haciendo aseo en una constructora, y comenta que al estar con tantos hombres, le provoca malestar y ansiedad sobre elevada. En cuanto a los Militares y Carabineros, también mantiene un rechazo, lo que hace que en varias ocasiones actúe de manera impulsiva, evitando el contacto con ellos, ya que empieza a somatizar, con taquicardias, falta de respiración, por los recuerdos de ellos.

Por parte de la señora Nadia, expone que no se observan grandes impactos o consecuencias al hecho represivo, sin embargo solamente comenta con gran dolor lo que puede recordar, indica que según lo señalado en su informe, después de ser liberada, comentó que no pudo terminar su enseñanza media, debido a que le ocasionaba una desmotivación para estudiar, por lo que optó ya no seguir asistiendo al colegio. En el área político social de Nadia, producto de los hechos ocurridos, de acuerdo lo que dijo en la evaluación, el impacto no fue tan severo como los de sus hermanas, respecto de las figuras de autoridad, pero sí mantiene un pequeño rechazo



hacia ellos; en cuanto a la edad de las demandantes en la época de ocurridos los hechos materia de autos dice que la señora Rosalba, tenía 20 años, la señora Sandra entre 16 y 17, y la señora Nadia 16, esto en 1984.

SEXTO: Que la parte demandada rindió la siguiente prueba:

Documental: Que, en el folio 33, acompañó: 1.- Minuta que da cuenta del estudio efectuado respecto de las causas mencionadas, conforme a los registros del Consejo de Defensa del Estado; 2.- Planilla que recoge el resumen de cada una de las causas comprendidas en el análisis efectuado, con indicación de los roles de las causas, tanto respecto del Tribunal de Primera Instancia como de la Corte de Apelaciones respectiva; 3.- Oficio DSGT N° 4792-7362 del Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social de fecha 8 de junio de 2022, en el cual informa los beneficios de reparación obtenidos por las demandantes de autos.

SÉPTIMO: Que las actoras han demandado al Fisco de Chile a objeto se le resarza el daño moral causado por su privación de libertad y tortura, sufridos en 1984, por motivaciones políticas.

OCTAVO: Que, como se dijo, el demandado opuso la excepción de prescripción, la que, atendida su naturaleza, debe analizarse y resolverse de modo previo al fondo de lo discutido.

NOVENO: Que, para abordar dicha cuestión, cabe considerar que la Excma. Corte Suprema, por sentencia de fecha 16 de marzo 2016, en autos rol N° 9.975-2015, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, ha sostenido:

“Quinto: Que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial cuya finalidad es hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, de manera que como ha señalado esta Corte, no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Sexto: Que, en efecto, no existe norma internacional incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad declarada en la sentencia. Su artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido.

Séptimo: Que como se ha expresado por este tribunal en fallos de similar materia, la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX

garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a este asunto.

Octavo: Que nuestro Código Civil en el artículo 2497 preceptúa que: "Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo".

Noveno: Que de acuerdo a lo anterior, resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.

Décimo: Que en autos la responsabilidad demandada se origina en las detenciones y posteriores torturas de que fueron víctimas los demandantes de autos, Joaquín Rifo Muñoz y Guillermo Carrasco Vera, en manos de funcionarios de Carabineros de la Segunda Comisaría de Temuco, sucesos que acaecieron el 17 de septiembre de 1973 y que se prolongaron durante trece y doce días, respectivamente. Tal como lo señaló el Tribunal Pleno de esta Corte en los autos Rol N° 10.665-2011, sólo a partir de la fecha del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación es que se podría comenzar a contar el plazo de prescripción que establece el artículo 2332 del Código Civil, pues con anterioridad a esa época los titulares de la acción no estaban en condiciones de haberla ejercido por carecer de antecedentes relativos al hecho que generó el daño que se pretende resarcir. De manera que como lo ha dicho esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones conociendo de causas similares, el plazo de prescripción ha de contarse desde la fecha de la comisión del ilícito o, en su caso, desde el 11 de marzo de 1990, o desde la entrega del informe de la denominada Comisión Rettig, esto es, el 4 de marzo de 1991; así, a la fecha de notificación de la demanda, el 18 de marzo del año 2013, la acción civil derivada de los hechos que la fundan se encuentra prescrita."

DECIMO: Que atento lo asentado por la Excm. Corte Suprema en ese fallo, y aplicado a esta causa, se puede concluir que si los hechos en que se basa la acción de las demandantes ocurrieron en 1984, al tiempo de notificarse al Fisco de Chile, había transcurrido en exceso el plazo de cuatro años del artículo 2332 del Código Civil, y ello aun cuando se estimare que el plazo prescripción ha de contarse desde el advenimiento de la democracia o desde la entrega del informe de la



Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o del denominado Informe Valech, aunque las actoras no estén allí incluidas.

DECIMO PRIMERO: Que atento lo concluido, no resulta necesario abordar las demás excepciones del demandado.

DECIMO SEGUNDO: Que todo lo anterior lleva a rechazar la demanda en todas sus partes.

DECIMO TERCERO: Que el resto de la prueba rendida no altera lo concluido.

DECIMO CUARTO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698 y 1713 del Código Civil; y 144, 159, 160, 170, 254, 342 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que se rechaza la demanda en todas sus partes, sin costas, por haber tenido las actoras motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol C-772-2022.

DICTADA POR DON CLAUDIO JARA INOSTROZA, JUEZ TITULAR DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS.

Certifico: que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Punta Arenas, 28 de noviembre de 2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXKHJVXYXX